

Nuestra Bandera

**REVISTA POLITICA Y TEORICA
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA**

En este numero :

**PROYECTO DE TESIS
PARA EL VII CONGRESO
DEL PARTIDO COMUNISTA
DE ESPAÑA**



Nº 1

ENERO de 1971

MINISTERIO
DE CULTURA



Nuestra Bandera

REVISTA POLITICA Y TEORICA
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

SUMARIO

	Pag.
Comunicado	3
PROYECTO DE TESIS PARA EL 8º CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA	5
I.— El signo histórico del mundo contemporáneo: transición del capitalismo al socialismo	7
— Ocaso histórico del capitalismo	7
— Revolución tecnológica y cambios sociales	10
— Perspectiva histórica	14
II.— Panorama socio-económico de España	17
— La realidad económica y sus beneficiarios	17
— Costes sociales y contradicciones de clase	18
— Crisis y líneas confrontadas	19
— Correlación de fuerzas políticas	21
— Los supuestos actuantes para una estrategia revolucionaria	22
— Movimientos nacionales y lucha de clases	25
— Los puntos de referencia de una perspectiva revolucionaria	27
— Supuestos teóricos del socialismo a que aspiramos	28
III.— El Partido	31
— Trayectoria histórica del Partido Comunista de España	31
— Por la regeneración del Partido	38
— Posición del Partido Comunista de España en relación con las fuerzas sociales	47
— Sobre la Juventud	50
— Sobre las mujeres	51
— Sobre los movimientos católicos	53
— Sobre las Fuerzas Armadas	54
IV.— Enunciados Programáticos	57
— Libertades Políticas. Medidas a favor de la clase obrera. Reivindicaciones a favor de los trabajadores no asalariados	58
— El P.C.E. y los estudiantes e intelectuales. El P.C.E. ante los problemas internacionales	59
— El P.C.E. ante el movimiento comunista internacional. El P.C.E. y los trabajadores emigrados	60

MINISTERIO
DE CULTURA



COMUNICADO

Reunidos representantes de importantes organizaciones y núcleos de comunistas del interior y de la emigración, han examinado los proyectos de Tesis y de modificaciones a los Estatutos que una amplia comisión había elaborado previamente.

El proyecto de Tesis que se publica en este número de Nuestra Bandera se somete al examen y discusión de todos los comunistas españoles, que, en un esfuerzo colectivo lo mejorarán y completarán con sus opiniones. Comienza así el trabajo preparatorio del 8º Congreso del Partido Comunista de España.

Próximamente serán publicadas las modificaciones a los Estatutos del P.C. de España con el fin de que sean examinadas por nuestros camaradas antes del Congreso.

En la reunión se designó una Comisión organizadora del VIII Congreso del Partido Comunista de España.

COMISION ORGANIZADORA DEL 8º CONGRESO
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

Enero de 1971.

GOVERNAMENTO

MINISTERIO
DE CULTURA



PROYECTO DE TESIS PARA EL VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

EL Partido Comunista de España está viviendo el principio del fin de una grave crisis política. Está llegando a su límite el deslinde de dos posiciones, de dos conductas, de dos maneras de entender la vida de militante comunista. De una parte, la fracción carrillista que administra la dirección oficial con un caciquismo apenas disfrazado —plenos amaños, publicidad triunfalista y autosatisfacción, insultos y falsedades a mansalva— en un intento desesperado de cubrir su capitulación ante las complejidades y dificultades de la lucha y de ocultar su visible incapacidad para captar, explicar y organizar los factores objetivos de la realidad sociológica y política de España. De otra parte, las fuerzas sanas del Partido, que se alzan contra la suplantación del centralismo democrático por el burocratismo autocrático de Carrillo y sus colaboradores, los cuales se sirven de los órganos de dirección, totalmente esterilizados por un aparato administrativo sometido a Carrillo, para encubrir y legalizar la represión administrativa contra los militantes que no aceptan la

paulatina y subrepticia transformación del Partido Comunista, en un partido de corte socialdemócrata, «integrable» al neocapitalismo.

La fracción carrillista trata de seguir capitalizando para sus sucios manejos el heroico historial de lucha del Partido Comunista de España y los esfuerzos abnegados de sus militantes obreros, campesinos e intelectuales que combaten en primera fila contra la dictadura de la oligarquía financiera. Al mismo tiempo con su política oportunista de derecha frenan el proceso de toma de conciencia de las amplias masas y obstaculizan la combatividad de los sectores más avanzados de la clase obrera y del pueblo. Al no tener más norte que sus estrechos intereses personales, los carrillistas han optado definitivamente por la sangría y el dislocamiento de la organización, en una loca carrera de ostracismos y expulsiones. Por contraste, el núcleo sano del Partido está decidido a imponer la corrección de estos defectos a través del análisis crítico y autocrítico de la realidad de España y del mundo de

hoy, de la realidad del Partido, hasta lograr una democracia interna al estilo de Lenin, a quien los reformistas mucho nombran, pero no siguen.

Esgrimiendo el sello y la caja, el aparato administrador carrillista ha lanzado desde su último «pleno» monipódico una sarta de falsedades y calumnias para desviar la atención de los militantes y simpatizantes del Partido de la criminal conducta de S. Carrillo, denunciada por un prestigioso miembro del Comité Ejecutivo y que —no lo duden— será ventilada por una Comisión Investigadora calificada.

En varias publicaciones, la corriente regeneradora del Partido ha mostrado con múltiples ejemplos y argumentos críticos que el carrillismo supone un grave peligro, porque su meta es adaptar el Partido Comunista a los planes de la burguesía «evolucionista» española. Todo su barullo pseudo-teórico en el plano internacional, con tesis como las de que el «Vaticano y los EE.UU. habían dado la espalda al régimen y se preparan para el posfranquismo», (tan estrepitosamente desmentidas por el Acuerdo con EE.UU. y la visita de Nixon a España, sin hablar ya del convenio militar con Francia, etc.) enlazan también con los planes de esa burguesía «evolucionista» que aspira a una España «europeizada», a «la integración del Partido Comunista al sistema democrático» burgués. (Tal como sugiere el conde de Motrico, según «Mundo Obrero», 6-11-70).

Para poder seguir influenciando a una parte de los trabajadores, Carrillo y sus secuaces siguen manifestando hipócritamente su «adscripción al movimiento comunista» y su amistad con los países socialistas, mientras se libran a una serie de intrigas y peroratas antisoviéticas pescadas en el río revuelto del revisionismo oportunista.

El oportunismo en política, tiene su trasfondo ideológico revisionista, no en textos «sacralizados», sino en realidades teorizadas por el marxismo-leninismo, que ellos intencionadamente deforman. El carrillismo revisa utilitariamente nociones y principios científicos del marxismo-leninismo y condimenta una mixtura de lexicografía marxista con ideas tomadas a crédito del arsenal pequeño-burgués y del revisionismo oportunista.

En esta situación es necesario que todos los militantes que aspiran a que el glorioso Partido Comunista de España vuelva por sus fueros y se depure de las miasmas oportunistas que le asfixian, formulen sus posiciones. Ha llegado la hora de que las fuerzas sanas del Partido, que son la inmensa mayoría de sus militantes, expongan claramente sus posiciones programáticas para ir avanzando con pasos firmes y seguros de organización, educación y lucha unitaria en torno a los problemas reales del país, hacia el VIII Congreso, hacia el Congreso de la regeneración del Partido Comunista de España.

I. El signo histórico del mundo contemporáneo: transición del capitalismo al socialismo.

«Los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño de los demás y del engaño propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a discernir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase» (Lenin).

Ocaso histórico del capitalismo.

La política general de los partidos comunistas, esto es, la estrategia y la táctica de su acción revolucionaria, dependen en primer lugar de la valoración que hacen de la época y de las fuerzas revolucionarias que se enfrentan en el mundo contemporáneo.

Como ha reiterado la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros, reunida en Moscú en junio de 1969, «la dirección principal de la evolución de la humanidad la determinan hoy el sistema socialista mundial, la clase obrera internacional y todas las fuerzas revolucionarias». Eso es así porque vivimos en la época de transición del capitalismo al socialismo en escala mundial.

Pero la demolición del sistema capitalista, último régimen explotador de la historia y la sucesiva construcción de un nuevo orden socialista, se presenta como un proceso largo y complejo. El progreso revolucionario de los pueblos tiene que hacer las cuentas con una multitud de fenóme-

nos y procesos sociales de muy distinto origen y significación.

El mundo de hoy presenta un cuadro muy abigarrado de situaciones. La Unión Soviética está empeñada en poner al servicio de sus pueblos y de toda la humanidad, los adelantos de la revolución científica y técnica para crear así las condiciones materiales de la transformación de la sociedad socialista en comunista. Los países que en el curso de la última contienda mundial y en la posguerra rompieron con el capitalismo avanzan tesonera-mente en la construcción del socialismo. Con la derrota del nazi-fascismo en Europa y del militarismo nipón en Asia, inmensas legiones humanas lograron acceder, en la retaguardia colonial del imperialismo, a la vida histórica y pugnan hoy por un desarrollo independiente; en unos casos, dentro del orden capitalista, y, en otros muchos, disponiéndose a romper las redes del neocolonialismo para vencer el hambre, el atraso técnico y científico y el bajo nivel de sus fuerzas productivas, con la ayuda del campo socialista y el apoyo solidario de

la clase obrera y de las fuerzas progresistas de todo el mundo. En los países del viejo capitalismo se han exasperado las contradicciones y cobra nuevos niveles y dimensión la lucha de clases. El campo socialista es el más firme aliado y sostén de la clase obrera y de todos los trabajadores en su lucha por la democracia y el socialismo. Con sus continuos avances contribuye poderosamente a extender las ideas emancipadoras del marxismo-leninismo. En todo el mundo existe la conciencia de los peligros que ocasionaría una nueva guerra mundial con armas termonucleares, y existen fuerzas de muy diversos sectores que se organizan para luchar contra la militarización y las guerras imperialistas. La organización del Tratado de Varsovia es un factor de seguridad y de paz en el mundo frente al belicismo de los imperialistas y de su bloque agresivo, la OTAN. Con su potencia económica y militar los países socialistas impiden al imperialismo exportar la contrarrevolución y favorecen el desarrollo de la acción revolucionaria del proletariado en los países capitalistas. La civilización está viviendo además una época de progreso científico y técnico que no tiene parangón en toda la historia anterior.

Al comprobar esa diversidad de fenómenos es preciso resaltar que la esencia o el signo determinante de la época es la acción de los Estados socialistas, de la clase obrera de los países capitalistas y del movimiento de liberación nacional por la transformación revolucionaria del mundo. Se trata de un proceso irreversible, que fue iniciado en 1917 por la Revolución Socialista de Octubre, acontecimiento de la humanidad que marca un viraje radical en la historia moderna.

El progreso histórico ha sido siempre obra de los hombres, cuya conducta se basa, a fin de cuentas, en los intereses de clase. Los contrastes de intereses y las contradicciones sociales, son siempre el motor de los cambios sociales. De ahí que los Partidos Comunistas, nacidos para organizar la revolución socialista y cons-

truir la nueva sociedad comunista, tengan que tomar como punto cardinal de referencia las tendencias históricas y la colocación de las respectivas fuerzas sociales que determinan la situación del mundo.

Es lógico que en un mundo tan diversificado como el nuestro, aparezcan muchas contradicciones sociales. A nivel universal la contradicción más importante es la que existe entre los dos sistemas mundiales antagónicos. En los centros imperialistas perdura y se ahonda la contradicción fundamental del capitalismo: entre la burguesía y el proletariado, contradicción que enlaza hoy con la existente entre los monopolios y los sectores perjudicados por su prepotencia. La explotación colonial y neocolonial genera la contradicción entre los pueblos dependientes y el imperialismo. El belicismo imperialista provoca, a su vez, una contradicción entre las fuerzas de la paz y los fautores de guerra.

Los comunistas, basándose en la visión marxista del proceso histórico-social, siempre sostuvieron que las contradicciones internas son el motor del progreso de la sociedad socialista, de su avance hacia el comunismo. Las divergencias y fricciones que pueden surgir entre distintos Estados socialistas deben ser resueltas con métodos idóneos, que tomen en consideración los intereses específicos de cada país socialista y de toda la comunidad socialista, de acuerdo con el marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario.

Todas esas relaciones entre los hombres y los pueblos, que son objeto y sujeto al mismo tiempo de contradicciones, forman la complicada urdimbre del mundo que vivimos. Pero esa urdimbre también tiene su hilo conductor en la contradicción entre el capitalismo y el socialismo, decisiva y fundamental porque sin ella todas las restantes tomarían otro cariz, tendrían otro significado y otras perspectivas de desenlace. La contradicción entre el sistema socialista y el sistema capitalista es la contradicción fundamental porque 1) expresa y de-

termina la dirección del progreso histórico moderno que lleva a la desaparición del orden capitalista a nivel mundial, 2) perdura a lo largo de toda una época histórica que está diferenciada por ese signo, hasta la total liquidación del capitalismo, 3) influye de una manera cardinal en la marcha y en el desenlace de todos los demás contrastes y contradicciones.

Los revisionistas en teoría, y oportunistas en política, no niegan la existencia de esos conflictos y contradicciones, lo que hacen es escamotear su significación política y tergiversar el papel determinante de las fuerzas interesadas en una u otra dirección histórica. Así sucede, por ejemplo, con las tesis de Carrillo que velan la diferencia entre la lucha por el socialismo y la lucha por libertades civiles y contra los monopolios. La tesis de S. Carrillo de que «la primera línea de la lucha entre los dos sistemas pasa por los países capitalistas», reduce a los países socialistas, que son como se sabe, la refutación material del capitalismo y su más viva negación, a meras plataformas o bases de abastecimiento de los movimientos revolucionarios del mundo capitalista. Con esa tesis Carrillo, socava el frente antiimperialista mundial de su puntal decisivo, dejando el campo libre para toda su concepción estratégica del futuro «capitalismo de Estado democrático» y de la «revolución en la libertad», y su táctica concreta de alianzas interclasistas, de «pacto para la libertad», «apoyo leal» a un gobierno que, según él, puede formar la burguesía evolucionista, y de la posibilidad de un régimen socialista en España «con un presidente de gobierno católico y el partido comunista minoritario.»

Es evidente que Carrillo, desea eclipsar en un Olimpo teórico la verdadera contradicción básica del mundo actual (entre el sistema capitalista y el sistema socialista), para de ese modo velar la íntima relación que existe entre la lucha de la clase obrera española y el fortalecimiento del mundo socialista; entre el apoyo imperialista a la dictadura de la burgue-

sía española y la solidaridad internacional de los comunistas y demócratas revolucionarios de España con las fuerzas revolucionarias mundiales (países socialistas, clase obrera internacional y movimientos antiimperialistas de liberación nacional).

En definitiva, esa tesis sumaria, sirve a Carrillo de punto de partida para desarrollar —como iremos viendo— toda su original concepción del futuro interclasista de España y del cometido del Partido Comunista.

El triunfo del socialismo, primero en la URSS y sucesivamente en una serie de países de Europa Central, Asia y Cuba, ha proyectado la contradicción esencial de la sociedad capitalista (entre el capital y el trabajo o entre la burguesía y el proletariado) a un plano mundial, bajo la forma de confrontación permanente entre los dos sistemas, en el terreno económico, político-militar e ideológico. La contradicción básica del capitalismo se va saldando a medida que triunfa la revolución en cada país, y desaparecerá completamente, cuando el socialismo haya triunfado en el mundo entero. Pero mientras eso no suceda, el eje de la historia seguirá girando en torno a la confrontación de los dos sistemas mundiales antagónicos.

A nivel de un país concreto como España, esa contradicción o confrontación fundamental de nuestra época, se refleja a través de todos sus vínculos con el exterior (pactos militares, tratados políticos, comercio, inversiones extranjeras, explotación de obreros emigrados, etc.), dado que España forma parte del sistema capitalista mundial y está inserta en las redes político-militares del imperialismo.

Sin embargo, ese contexto exterior no anula el hecho de que lo inmediatamente actuante son los conflictos sociales del país, la confrontación concreta de las clases en la sociedad española, en torno a los problemas que le son propios, pero que necesariamente ampalkan con los determinantes mundiales del sistema donde están colocados. De ahí se deduce,

que sigue siendo válida la tesis leninista de que el proletariado, tanto de las grandes potencias, como de los países pequeños, al luchar por sus objetivos nacionales no debe olvidarse de «luchar contra la estrechez, el exclusivismo o la disociación de un nacionalismo de vía estrecha, con menoscabo de lo general y de la totalidad, debiendo subordinar los intereses particulares a los generales.»

Ese es el único camino que tiene el Partido Comunista para cumplir su misión histórica, como vanguardia de la clase obrera y abanderado del progreso de su propio país. La política que Carrillo preconiza al contraponer, de hecho, lo nacional a lo internacional, conduce a un atolladero porque subordina la acción de la clase obrera y de su partido a una estrategia diseñada para apuntalar, con nuevos instrumentos, la hegemonía de la burguesía.

Revolución tecnológica y cambios sociales.

Las condiciones materiales en que los hombres producen y viven están cambiando por efecto de una revolución científico-técnica, cuyos ritmos y alcance no tienen precedentes.

Esa revolución comporta cambios cualitativos en la tecnología de producción, en la energética, en los objetos y medios de trabajo, en la ordenación de los procesos y en el carácter del trabajo humano. El rasgo diferencial del progreso científico y técnico es la vinculación rápida y eficiente de las conquistas científicas a la producción, a través de todos los elementos que intervienen en ella. Fruto de esa vinculación son el radar, la televisión, los ordenadores electrónicos, los productos sintéticos, plásticos, fibras, vitaminas artificiales, hormonas, antibióticos, aparatos cósmicos, etc.

Esos cambios marcan profundamente la fisonomía del trabajador moder-

no, pues le exigen un mayor nivel de conocimientos y nuevas formas de trabajo y de vida. Por ser, en principio, un factor potencial de progreso histórico, la ciencia y la técnica se han convertido en terreno de confrontación de los dos sistemas socio-económicos antagónicos, terreno en el que habrán de rivalizar durante un largo período. Este hecho nuevo y cardinal valoriza con mayor fuerza aún la importancia básica que tiene la marcha de la confrontación entre el capitalismo y el socialismo para todo el proceso revolucionario mundial.

De ahí la importancia que tiene, para la lucha de todos los movimientos revolucionarios del mundo, el avance del sistema socialista y de su baluarte principal: la Unión Soviética. El sistema socialista está hoy empeñado en poner los adelantos científicos y técnicos al servicio del progreso y del bienestar de toda la humanidad. La URSS y otros países socialistas están en una etapa cualitativa nueva de desarrollo intensivo, que supone profundas alteraciones estructurales, creación de nuevos sistemas de dirección y organización, de condiciones para aplicar aceleradamente las nuevas tecnologías, la tecnificación de todas las ramas, así como la optimización de las proporciones entre los distintos eslabones y el desarrollo de la especialización y un aprovechamiento más eficaz de todos los recursos.

La revolución científica y técnica acentúa el carácter social de la producción, lo cual exaspera el conflicto entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y la forma monopolista de propiedad.

Al mismo tiempo, la revolución científica y técnica lleva a sus límites más altos la preparación de las premisas materiales (grandes industrias y grandes concentraciones obreras) que exigen el socialismo.

Se hace cada día más evidente que la civilización cuenta con medios materiales para resolver los problemas que abruman a los pueblos: alimentación, enseñanza, salubridad,

etc. El obstáculo es el capitalismo, porque usurpa el progreso social en beneficio de las clases acomodadas.

La burguesía imperialista, forzada a convivir con el sistema socialista, se adapta a las nuevas condiciones y pone en juego una serie de instrumentos destinados a mantener el control de las modernas fuerzas productivas. Para defender sus privilegios, la burguesía imperialista subordina a su control todas las esferas de la vida social en un proceso de creciente interpenetración del poderío de los monopolios con el del Estado, en la vida política, económica y social y tanto a nivel nacional como internacional. Eso se llama capitalismo monopolista de Estado.

En la economía, el sistema del capitalismo monopolista de Estado usurpa las conquistas de la revolución científica y técnica, materializadas en poderosos aparatos productores, con el fin de conservar el control de todos los recursos nacionales y obtener el máximo de rendimiento de la producción social, en interés de los monopolios.

En la vida política, la burguesía monopolista dosifica la represión con mecanismos estatales y privados de acoplamiento y captación («participación en los beneficios», «cogestión», extensión de los servicios de previsión social, manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación de masas, etc.). Propagando los supuestos beneficios de la llamada «sociedad de consumo, la burguesía se esfuerza por «integrar» a las organizaciones obreras, por disolverlas en una gelatina seudodemocrática que, en definitiva, apuntale la dictadura de la oligarquía financiera. Pero como las contradicciones y conflictos de clase son reales, la burguesía se ve obligada a desarrollar su aparato coercitivo, a amañar nuevas leyes represivas, a montar bloques y conciliábulo internacionales para mantener su poder.

En el plano social, el principal esfuerzo de la burguesía está orientado a evitar, ante todo, la unidad y la or-

ganización de los explotados. Con ese fin accede a ciertas reivindicaciones obreras y populares para salvar lo esencial, para frenar la lucha de clases y ampliar su base social.

Recordaremos que según la teoría marxista, el capitalismo descansa en la propiedad privada de los medios de producción, lo cual permite a los capitalistas explotar a los trabajadores asalariados y apropiarse de la plusvalía. Las diversas formas de evolución de la propiedad privada capitalista (propiedad del patrón individual, sociedad anónima o empresa pública capitalista) no son más que medios de adaptación del dominio burgués a las nuevas estructuras productivas. Como el antagonismo de los intereses de clase entre la burguesía y el proletariado, no puede ser eliminado sin poner fin a la propiedad privada capitalista, esas formas evolucionadas de propiedad son también nuevas formas de expresión del antagonismo de clase, suyacente en la estructura socio-económica del capitalismo.

Con el capitalismo monopolista o imperialismo, que es el predominio de las grandes corporaciones financieras que monopolizan los mercados, gracias a sus fabulosos capitales, a su control de la producción y a la concertación directa, el sistema capitalista entra en su última fase, en su último intento de soslayar la exigencia objetiva de socializar la propiedad para ponerla en congruencia con el carácter cada vez más social de la producción.

La expansión de las sociedades anónimas y la intervencionalización de los monopolios de los bancos y de la industria, configuraron en las fronteras de este siglo un nuevo prototipo de capital: el capital financiero, personificación genuina del monopolio. Pero ahí no culmina la evolución de las formas de organización capitalista. Las contradicciones del sistema, puestas al desnudo de una manera explosiva por la primera guerra mundial, por la «Gran Depresión» de los años 30, por la segunda guerra mundial, habrían de hacer imprescindible para el sostén del capitalismo, acechado por la ri-

validad del mundo socialista y el empuje cada vez más arrollador del movimiento obrero y de las fuerzas descolonizadoras, la institucionalización de la intervención permanente del Estado desde dentro de la vida económica, con el fin esencial de asegurar la valorización del capital, la reproducción capitalista, es decir, las condiciones indispensables para la vida del capitalismo. De ahí que el capitalismo presente hoy «nuevas facetas»: «Se intensifica su carácter de capitalismo monopolista de Estado. Utiliza cada vez más ampliamente resortes como el estímulo estatal a la concentración monopolista de la producción y del capital, la redistribución por el Estado de una parte cada vez mayor de la Renta Nacional, la concesión de pedidos militares a los monopolios, la financiación gubernamental de proyectos industriales e investigaciones científicas, la elaboración de pronósticos y programas de desarrollo económico a escala nacional, la política de integración imperialista y las nuevas formas de exportación de capital» (Documento principal de la Conferencia comunista mundial). Esa evolución de las formas del capitalismo no supone cambio de su esencia explotadora. Por el contrario, exaspera las viejas contradicciones y engendra otras nuevas: entre la tendencia a planificar y la anarquía de la producción; entre el monopolio y la competencia; entre el Estado y los grupos monopolistas por separado; entre las necesidades de los pueblos y el despilfarro creciente de recursos en militarización, gastos especulativos y burocráticos, etc.

En resumen, hay un encadenamiento lógico, una yuxtaposición de las formas del sistema de relaciones capitalistas: capitalismo individual, capitalismo monopolista, capitalismo monopolista de Estado. Son éstas, formas que va tomando el sistema a tenor con el desarrollo de sus estructuras productoras, pero sin alterar su esencia capitalista. Son formas con contenido real, que no pueden ser desmontadas mecánicamente sin destruir su base de sustentación: la propiedad

privada capitalista. Más tajante: el capitalismo monopolista de hoy no podría subsistir si renunciase (pura hipótesis) al entrelazamiento de los monopolios con el Estado: al capitalismo monopolista de Estado. Más allá de éste, sólo se puede avanzar hacia el socialismo. Muy diferente es la interpretación carrillista del capitalismo monopolista de Estado y de la dialéctica de sus contradicciones. «Ciertas gentes —escribe S. Carrillo— en sus elucubraciones político-sociales, haciendo suyas las concepciones neocapitalistas, han sostenido que hoy no cabe la existencia de otro capitalismo que no sea el capitalismo monopolista de Estado. En lo esencial, esa concepción se basa en el olvido de que el capitalismo monopolista de Estado es un conjunto de superestructuras, bajo las que se mantienen muchas estructuras del viejo capitalismo». «En los fundamentos de las actuales superestructuras del capital monopolista o del neocapitalismo (sic!) hay un enorme subsuelo de antiguo capitalismo.» («Después de Franco ¿qué?», págs. 117-118.)

Dejemos a un lado la confusión de Carrillo para quien es igual «capitalismo monopolista o neocapitalismo.» Este último concepto no es más que un slogan publicitario de falsa ideología destinado a hacer creer que el capitalismo se ha higienizado y humanizado, mientras que el concepto leninista de capitalismo monopolista traduce la esencia real del capitalismo en su fase última del imperialismo. Dejemos también de lado el barullo que se arma Carrillo manipulando conceptos de estructura y superestructura (1). El los entiende a la manera del pastelero (aunque no tiene nada que ver con ese noble oficio, ni con ningún otro honesto trabajo) que fabrica emparedados con capas superpuestas de hojaldre y crema, pero aquí el problema consiste en quitarle hojaldre al pastel carrillista. Dejando de lado, todos esos «enfoques», queda lo siguiente:

(1) Ver folleto «¿Quién mina la unidad del Partido?», pág. 4.

El capitalismo monopolista de Estado es en España y en todas partes un sistema de dominio monolítico, cuya base material (fábricas, transportes, red comercial, etc.) puede ser más o menos desarrollada, pero que siempre tiene un grado de concentración de la propiedad en los eslabones decisivos de la economía, capaz de sustentar el poder opresor. Tal sustento necesita del Estado y, en España —como veremos luego— la guerra se hizo precisamente para dar al débil capital monopolista el apoyo que necesitaba para desarrollar una base material adecuada. Esa base, con todas sus precariedades y defectos, ha sido desarrollada a costa del hambre y de los sufrimientos del pueblo y las estructuras económicas de España (entendidas a la manera marxista, como conjunto de relaciones económico-sociales dominantes) son hoy monolíticas. Negar esa realidad con subterfugios seudoteóricos como el del «capitalismo de Estado democrático», no puede servir más que para hacer el juego a la burguesía «evolucionista» que quiere relevar al dictador dejando intacto su trono. La permanente interpenetración de los monopolios con el poder del Estado, en la economía y en la política, que constituye el sistema llamado capitalismo monopolista de Estado, no equivale a la disolución del Estado, ni de los monopolios, que ni se funden, ni se amalgaman en un tercer elemento distinto. En realidad, ambos componentes del sistema se entrelazan en el capitalismo monopolista de Estado pero conservan su fisonomía propia y una relativa independencia. Eso explica la lucha entre los monopolios por una u otra política estatal; eso explica también el alcance político de toda acción antimonopolista, aún cuando la motivación inmediata que la impulse sea económica, cultural, etc. En el plano propiamente económico esta visión dialéctica del sistema del Capitalismo Monopolista de Estado pone al descubierto que la explotación de los monopolios no se limita solamente a los obreros industriales o agrícolas, sino que se extiende —a través del mecanis-

mo de impuestos, crédito, subvenciones, compras estatales, concesiones, empresa del Estado y financiamiento público— a la gran mayoría de la sociedad. De ahí se infiere que la destrucción del poder económico de la burguesía monopolista, tiene que apoyarse necesariamente en un cambio radical del poder político.

Es evidente que hoy las formas de propiedad capitalista han evolucionado, alcanzando su punto más alto en la empresa estatal, del mismo modo que la coordinación de los intereses económicos capitalistas tienen su máxima expresión en la planificación indicativa. Esas formas del Capital Monopolista de Estado moderno (practicadas con escasa ventura por la dictadura franquista) constituyen una negación puramente formal del contenido privado capitalista de la propiedad y de la gestión. Para que esa negación formal se convierta en negación real, en liquidación de la apropiación privada capitalista que amparan, es necesario destruir el Estado monopolista. Otra vía no existe.

Todas las nuevas facetas del capitalismo, ligadas al sistema del capitalismo monopolista de Estado tienen como causa profunda las viejas y nuevas contradicciones del capitalismo.

Con el progreso tecnológico aumentan considerablemente el grado de explotación de la clase obrera, la parte del trabajo y de la riqueza social que se apropian los capitalistas. Esto ha exasperado los antagonismos de clase y ha complicado enormemente el equilibrio inestable de las economías capitalistas como lo demuestra la crisis actual de su sistema monetario mundial. Al mismo tiempo ha exacerbado los contrastes entre las potencias imperialistas. En el campo del imperialismo existe una serie de contradicciones más o menos larvadas, la principal de las cuales es la que existe entre los EE.UU., de un lado, y Europa Occidental, del otro. Estas contradicciones se basan en el desarrollo desigual del capitalismo que altera la colocación mundial de los

países capitalistas. Alemania Occidental se ha convertido en la segunda potencia del mundo capitalista y hoy aspira a revalidar en términos políticos su enorme potencial económico, a costa de sus propios asociados. Japón disputa el segundo puesto en el mundo capitalista, con unos ritmos de crecimiento y unos niveles técnicos y de producción que ya le permiten competir seriamente en todos los mercados.

La dialéctica contradictoria del desarrollo capitalista sigue, pues, gobernada por las dos tendencias ya apuntadas por Lenin: «una, que hace inevitable la alianza de todos los imperialistas, y otra que contrapone unos imperialistas a otros. Dos tendencias, ninguna de las cuales cuenta con cimientos sólidos..»

Perspectiva histórica.

Desde un punto de vista general, el imperialismo ha perdido para siempre la iniciativa histórica, pero eso no excluye, sino que presupone, sus mayores esfuerzos para apuntalar su dominio, especialmente frente al peligro de revolución socialista. En esa tarea el imperialismo yanqui ha asumido el papel de gendarme mundial de la reacción.

Este es el aspecto capital que ningún partido comunista puede dejar de considerar al elaborar y aplicar su línea política nacional. Por eso resulta peregrino y monstruoso que se intente introducir como premisa política del PC de España, la tesis carrillista de que los «norteamericanos han dado la espalda a Franco», cuando todo el mundo sabe que tienen un acuerdo de «colaboración», equivalente a la primera etapa de incorporación oficial de España a la OTAN.

Por la mismo razón de clase, hoy interesa ver que uno de los puntales de sustentación exterior de las estructuras y superestructuras dominantes en Europa es la interpenetración de los monopolios en el Mercado Común.

El Mercado Común Europeo es un intento de adaptar las relaciones capitalistas internacionales a las exigencias del desarrollo de las fuerzas productivas, en una situación de confrontación con el sistema socialista, de competencia exasperada entre los países capitalistas, de acción antimopolista de los pueblos de Europa y de lucha de liberación nacional de las antiguas colonias y países dependientes.

El Mercado Común Europeo no es la panacea que lleva a la sociedad de la «abundancia», sino el reino de los grandes monopolios, el reino de la explotación «racionalizada» de los trabajadores, el reino de la discriminación de los obreros emigrados, el reino de la subordinación neocolonial de los países «asociados». La entrada de España en el Mercado Común significará la institucionalización de su enfeudamiento a los grandes monopolios imperialistas que controlan ya los centros cardinales de su economía. Este hecho es un motivo de peso para que las fuerzas revolucionarias dediquen el máximo de atención a la unidad internacional antiimperialista. El dominio imperialista internacional solamente podrá ser quebrado con la unidad antiimperialista y revolucionaria internacional. Por eso la actitud internacionalista de los partidos comunistas no puede limitarse al aporte nacional —fundamental e imprescindible— sino que supone la cohesión del proletariado mundial y de todas las fuerzas revolucionarias, empezando por las comunistas, en un frente común internacional antiimperialista. De ahí la necesidad objetiva de una estrategia y una táctica común a nivel mundial, pues como se dice en el Documento principal de la Conferencia comunista mundial de 1969, «La situación actual exige la unidad de acción de los comunistas, de todas las fuerzas antiimperialistas, para desplegar, utilizando al máximo las nuevas posibilidades, una ofensiva más amplia contra el imperialismo y las fuerzas de la reacción y de la guerra.»

Si en este cuadro general de contra-

masión controladas por capitales
técnicas, licencias, gustos y decisión
de los monopolios extranjeros. Es in-
dudable que la dependencia econó-
mica entrará a su vez, la dependencia
política. A la larga, esta no puede
ser una perspectiva reducida para
ningún pueblo. El progreso económico
y social de España, como nación in-
dependiente y soberana de sus desti-
nos, sólo tiene porvenir en el socia-
lismo. El interés nacional de las clases
trabajadoras de España y la experien-
cia monopolista son incompatibles.

diciones y tendencias visibles en el
mundo tratamos de prever el destino
histórico de nuestro propio país, ten-
dremos que llegar a la conclusión de
que en el régimen capitalista donde
los monopolios usufructúan las grandes
conquistas de la ciencia y de la téc-
nica para explotar y neocolonizar al
mundo no socialista. España tiene
asignado un papel muy subordinado:
especialización turística, ciertos culti-
vos selectos, exportación de mano de
obra y, en el mejor de los casos, in-
dustrias de ensamblaje o de transfor-

MINISTERIO DE CULTURA



II. Panorama socio-económico de España

La realidad económica y sus beneficiarios.

La España de hoy se halla inmersa en la realidad del sistema capitalista mundial que, como se sabe, vive su ocaso histórico en un estado de crisis general como sistema social, a partir del nacimiento del nuevo sistema socialista en la Revolución de Octubre de 1917. El sinuoso proceso de suplantación del capitalismo se exterioriza hoy en una aguda confrontación entre los dos sistemas sociales que rivalizan a escala mundial y en el avance desigual de las revoluciones emancipadoras, democráticas y socialistas por las distintas regiones de la Tierra.

En España, el desarrollo del capitalismo transcurre en un proceso de interpenetración entre el poder monopolizador del capital bancario e industrial y el Estado, proceso que configura el sistema de capitalismo monopolista de Estado.

Al iniciarse la década de los 70, España, por el nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas y por la tasa teórica de la «renta nacional por habitante», unos 700 dólares anuales (concepto brumoso que esconde las más brutales disparidades de nivel de vida y de desarrollo económico y social de las regiones) ocupa dentro del mundo capitalista un lugar intermedio entre los países altamente desarrollados y aquellos otros subdesarrolla-

dos. En España predominan las actividades industriales y los servicios, pero la agricultura sigue siendo una esfera importante, de grandes desequilibrios y contrastes sociales, que ocupa a un 30 por ciento de la población activa y tiene un peso apreciable en la producción y en el comercio exterior. La mayor parte de la población española se agolpa actualmente en las ciudades. Los asalariados constituyen la inmensa mayoría de la población activa. En un periodo relativamente breve se ha producido una expansión considerable de los consumos modernos, fenómeno socialmente limitado y contradictorio que la burguesía pretende instrumentar para dar vida al mito de la «civilización de consumos.» Paralelamente se está registrando un éxodo catastrófico de la población rural que busca mejores condiciones de vida en los centros industriales y en el extranjero. Este proceso presenta además grandes diferencias de nivel de producción, renta y ocupación en las distintas regiones del país; entre las ciudades y el medio rural; entre la industria y la agricultura, entre los servicios impulsados por el turismo y la especulación, de un lado, y las necesidades de la economía y de la población, de otro, pero los contrastes más escandalosos están en las condiciones de existencia de las distintas clases que componen la sociedad española.

El crecimiento de la producción y de la riqueza tiene en España unos beneficiarios bien definidos: en primerísi-

mo lugar la oligarquía financiera, superélite burguesa compuesta de unos 200 grandes magnates financieros (directores de banco, grandes empresarios, altos burócratas) que constituyen una especie de Estado Mayor de la alta burguesía (formada por unos 54.000 grandes empresarios y financieros, terratenientes aburguesados, gerentes y ejecutivos de grandes empresas, muchos altos jefes de las Fuerzas Armadas, funcionarios de los cuerpos privilegiados de la administración estatal, corredores de bolsa, altas profesiones comerciales y jerarquías eclesiásticas). La dictadura franquista es el poder de esa alta burguesía que se ha enseñoreado del país.

Costes sociales y contradicciones de clase.

La concentración del poder económico y político en manos de esa minoría todopoderosa, tiene como reverso el despojo, el sojuzgamiento y la brutal explotación de más de ocho millones y medio de asalariados y la no menos real subordinación de amplios sectores sociales intermedios de «autopatronos» y profesionales que padecen una situación objetiva que les emuja o puede empujar a luchar contra el sistema del capitalismo monopolista de Estado y, más directamente, contra su aparato dictatorial fascista.

Así, pues, en España la división de las clases no aparece como una simple dicotomía entre grandes propietarios y obreros depauperados, sino en un cuadro complejo con múltiples estamentos intermedios que se intervinculan e interfieren en el mundo económico y político. La estructura social de la España contemporánea resulta de un proceso complejo de descomposición y recomposición de las clases. En el seno de las clases dominantes el proceso de descomposición resulta visible en la aristocracia terrateniente, escasamente desfeudalizada y en la pequeña burguesía tradicional de los antiguos rentistas, fun-

cionarios de carrera, militares y empresarios (industriales, comerciales y agrarios) semiartesanales, especialmente en el campo y en las actividades hoy marginadas por las nuevas formas capitalistas que las destruyen o absorben. Paralelamente se asiste a una recomposición de la clase burguesa por efecto de la incorporación de «nuevos ricos» surgidos al socaire del peculado y de los privilegios y de las élites burocráticas que manipulan los resortes del sistema de capitalismo monopolista de Estado. De igual modo y por efecto tanto del desarrollo capitalista de ciertas esferas, como de la ausencia de desarrollo o la decadencia de otras, cambia la composición de la pequeña burguesía a la que se incorporan nuevos estamentos más vinculados a la actividad mercantil y burocrática, mientras se descomponen las viejas «clases medias». La composición de la clase obrera ha cambiado por efecto de un proceso doble y simultáneo: aumento numérico de los trabajadores asalariados de la industria y los servicios, y reducción del subproletariado rural, con la consiguiente renovación generacional y la proletarización y urbanización acelerada de trabajadores del campo (aparceros, arrendatarios, semipropietarios y pequeños propietarios) y una mayor diferenciación categorial, ligada al desarrollo de la división social del trabajo, por efecto de la revolución tecnológica, que supone la incorporación al proceso productivo de categorías que antes estaban al margen del mismo (laboratoristas, empleados de control, programadores, diseñadores, técnicos, ingenieros, investigadores, etc.) La formación de estratos proletarios diferenciados, consecuencia del desarrollo desigual del capitalismo por ramas y regiones, no ha destacado todavía en España complicadas superestructuras políticas en forma de aristocracia obrera o de políticos reformistas profesionales, pues la burocracia verticalista y los tecnócratas son simples mercenarios, desnudos de toda representación popular. Esto no niega las características diferenciales de algunas categorías de

técnicos, empleados y hasta obreros cualificados y, principalmente, de trabajadores no asalariados, circunstancia que viene a destacar la necesidad de tomar en cuenta esos intereses específicos, al trazar la estrategia y la táctica revolucionaria.

El dato de mayor relieve que podemos derivar de esa realidad y de la experiencia de la lucha de clases, a que nos referiremos más adelante, es el siguiente: el proletariado revolucionario no puede destruir él solo la hegemonía de las clases dominantes.

El hecho social determinante es la contradicción entre el capital y el trabajo o burguesía y proletariado, lo que constituye el cimiento del antagonismo de clases. A consecuencia de ello, mientras la oligarquía financiera y sus secuaces se lucran con el crecimiento económico sudado por los trabajadores, una inmensa masa de españoles de más de siete millones, es decir, uno de cada cuatro —según un reciente estudio sociológico— viven en un estado de «indigencia absoluta o casi absoluta» y en el fondo de la escala social hay unos dos millones de personas, «cuya situación es todavía más desesperada». Mientras esa burguesía ahita de riqueza y de Poder propaga el «milagro» y la «prosperidad de España», cerca de tres millones de «nadatenientes» han emigrado al extranjero en busca de ocupación y mejores salarios, pues —según datos oficiales— la media de los salarios en España es menos de la mitad de la existente en los países capitalistas desarrollados de Europa.

La experiencia de España, lejos de invalidar, confirma así la tesis marxista de que a medida que crece la economía capitalista se polarizan la riqueza y la indigencia social y física, la concentración del poder y de la riqueza en manos de la burguesía, mientras en el otro extremo, la población trabajadora presenta extensas zonas de miseria social y hasta física, consecuencia del aumento de la explotación y de la subordinación al capital.

El hecho no cambia de esencia porque la miseria irritante y visible del

chabolismo y las hambres apocalípticas de las regiones de latifundio, hayan cambiado de forma con el disparatado éxodo y despoblamiento rural, con la emigración masiva de mano de obra al extranjero (uno de los principales capítulos de la exportación «invisible» española que está «ordenado» por el Instituto de emigración, sucesor desarrollista del tristemente célebre Auxilio Social de la inmediata posguerra), y con el agolpamiento de población trabajadora en las grandes ciudades, donde padece las consecuencias de una ocupación inestable, de la escasez de viviendas, de escuelas, de servicios comunitarios, de hospitales, etc. El hecho profundo es que el desarrollo del capitalismo monopolista no puede por menos de generar la explotación creciente y la alineación de los productores directos, con sus secuelas de indigencia, deshumanización e incertidumbre en el futuro, para la mayoría de la población trabajadora que crea el capital con su fatiga.

Crisis y líneas confrontadas.

La forma en que hoy se distribuye la renta nacional entre las diversas clases sociales de España y el alza creciente del coste de la vida, hacen que, pese a las múltiples necesidades insatisfechas que tienen millones de trabajadores, los aumentos de la producción no pueden ser totalmente absorbidos por el mercado.

El crecimiento económico de los últimos años ha estado y está condicionado por el retraso general del país, por la baja tecnificación, las arcaicas estructuras agrarias, los fuertes desequilibrios regionales e intersectoriales, la desocupación más o menos encubierta, los salarios de hambre, las extensas manifestaciones de miseria social y física y, por contraste, el lujo, la ostentación de riqueza y despilfarro de las clases poseedoras.

Ese retraso relativo aconseja a las

clases dominantes valerse del Estado totalitario para proteger sus empresas mal dotadas y de baja productividad, para sostener los bajos rendimientos de sus campos con subvenciones y proteccionismo oficial y con la explotación brutal de los trabajadores, mediante jornadas agotadoras y salarios de hambre y, sobre todo, les aconseja pactar con los monopolios internacionales y con los Estados imperialistas, a los cuales se subordinan en el plano económico, político-militar y cultural.

Espoleada por la necesidad de hallar solución a las dificultades económicas y políticas, la oligarquía financiera aspira a escapar al círculo vicioso de las contradicciones económico-sociales, asociándose más estrechamente a los monopolios y al imperialismo neocolonial de EE.UU. y de Europa Occidental. Por eso se orienta básicamente a la incorporación total de España al Mercado Común de los monopolios europeo-occidentales y a la OTAN.

Durante decenios, la industrialización monopolista de España ha descansado prácticamente en el atraso de una agricultura imposibilitada de absorber la mayor parte de la producción de las nuevas industrias, las cuales, debido a su bajo nivel de productividad y a estar amparadas en la protección oficial, tenían que basar su desarrollo en el mercado interno.

El nivel alcanzado hoy por la industria impone necesidades crecientes de importaciones imprescindibles, las cuales reclaman mayores recursos en divisas. Pero como las principales fuentes de divisas (turismo, remesas de trabajadores emigrados e inversiones extranjeras) encuentran topes a su expansión y no pueden seguir el ritmo creciente de las necesidades que plantea la importación, resulta que las exportaciones españolas de mercancías (agrícolas e industriales) aparecen como una vía de obtención de divisas cada vez más decisiva para equilibrar el descubierto que presentan las cuentas de España con el mundo exterior. La incapacidad de la agricultura de adaptarse a las nuevas ne-

cesidades que plantea el desarrollo actual, ha convertido en un tópico más el tema de la «reforma agraria». Del mismo modo, el atraso de las estructuras industriales, incapaces de proporcionar artículos competitivos, viene a denunciar el mito del «milagro económico» español, falsedad ilustrada dolorosamente en las consecuencias sociales a que hemos hecho referencia más arriba.

En definitiva, la conservación de las industrias (conservación que exige su desarrollo incesante) tropieza cada vez más con la ausencia de un mercado interior sólido y de mercados exteriores amplios y seguros.

Siendo así, ante la perspectiva del ingreso en el Mercado Común, presentada por la oligarquía financiera y sus secuaces como panacea a todos los males de la «Patria», el actual proteccionismo administrativo no podrá perdurar, al menos que renuncie, cosa imposible, a las exportaciones. Esa perspectiva ya trazada en el acuerdo asociativo España-Comunidad Económica Europea (que establece un período transitorio de modernización de la economía española y de apuntalamiento del orden establecido) exige de la industria y del agro un notable aumento de la productividad. Y esto también implica un crecimiento de la producción y, por consiguiente, de los mercados. De ahí la apremiante necesidad que siente la burguesía, de expansión de la demanda interna, cuya precondition es la modernización del agro (modernización económica y social imposible con este régimen) y la reestructuración de la industria y los servicios.

La oligarquía ha optado ya por conseguir un «equilibrio exterior» (es decir, por equilibrar las entradas y salidas de divisas para mantener el tipo de cambio de la peseta) mediante «estabilizaciones» periódicas que reducen la «demanda interior», lo que equivale a congelar los salarios, a cortar el crédito al sector no monopolista y, sobre todo, a un «aumento notorio del nivel de desempleo.»

El círculo vicioso de que venimos

hablando presenta, pues, el siguiente eslabonamiento: el mantenimiento de la actividad industrial exige el aumento de las importaciones de bienes de producción y también de alimentos que la agricultura actual no produce en cantidades suficientes. Esto reclama más divisas, cuya obtención no puede descansar fundamentalmente en los ingresos que proporciona el turismo, las remesas de obreros españoles emigrados y las inversiones extranjeras —sujetas a la coyuntura económica y financiera del imperialismo— sino que necesita de un aumento de las exportaciones nacionales. Para que ese aumento sea viable, la economía española debe aumentar su grado de competitividad y esto lleva de nuevo al problema de las importaciones necesarias para modernizar la base productiva.

La salida de ese círculo vicioso, cuyas raíces están en la esencia de las relaciones capitalistas, en las contradicciones sociales inherentes al capitalismo monopolista de Estado, no puede estar como pretende la oligarquía, en un nuevo equilibrio conseguido por la vía del neocolonialismo económico con aumentos de las inversiones extranjeras en capital y servicios y una más estrecha interpenetración económica y política con el Mercado Común y con EE.UU. La orientación de la oligarquía supone perpetuar el retraso relativo del país pues para conservar los privilegios monopolizadores y latifundistas, necesita los bajos salarios, un alto nivel de desempleo, el éxodo masivo de obreros españoles al extranjero y el sacrificio de la pequeña y media (y no tan media) empresa.

La salida del círculo vicioso de la enfeudación de España, en interés de los trabajadores, en interés del presente y del progreso futuro del país, exige, pues, quebrar el dominio de esa oligarquía beneficiaria del orden establecido, exige un desarrollo articulado de todos los sectores que tenga por norte las necesidades sociales de la población trabajadora y no el enriquecimiento de una minoría de privilegiados.

Correlación de fuerzas políticas

La correlación de fuerzas políticas en presencia descansa en el cuadro de relaciones sociales —cuyo esquema ya ha sido descrito anteriormente— que configuran la sociedad española. Esas relaciones sociales y sus superestructuras políticas actuales tienen en la guerra de 1936-1939 un antecedente histórico determinante, que no puede ser subjetivamente ignorado por quienes aspiren a entender, para cambiar, la España actual. El triunfo del fascismo en 1939 cortó violentamente el proceso de desarrollo de la lucha democrática de masas y entronizó el dominio totalitario de la gran burguesía monopolista.

La gran burguesía monopolista (la banca, las jerarquías militares, burocráticas y eclesiásticas) propició el triunfo del fascismo para evitar la quiebra total de su hegemonía política e impedir que las fuerzas sociales progresistas construyesen un nuevo sistema de relaciones sociales (económicas, políticas, nacionales y culturales). El capital monopolista, surgido en España en la segunda década de este siglo, contaba con una base material muy deficiente que necesitaba para sobrevivir y prosperar el apoyo de un Estado totalmente a su servicio.

Esa misión la ha cumplido la dictadura franquista que mantuvo y desarrolló los privilegios desorbitados de la oligarquía financiera y de los terratenientes, apuntalando por medio de una guerra contrarrevolucionaria y de la sistemática represión posterior, unas estructuras socio-económicas caducas.

Con ese mismo fin, el Estado nacional-sindicalista instrumentó un complicado sistema totalitario de intervencionismo económico. Creó aceleradamente un conglomerado de empresas estatales, unos «sindicatos» domesticados y un poderoso aparato represivo, y lo colocó al servicio incondicional de las clases vencedoras. Estas tomaron el país como botín de

guerra y mediante el ignominioso sistema del «ahorro forzoso», de los salarios de hambre, del desempleo masivo, de la inflación y la carestía, lograron acumular fabulosas fortunas.

Con la dictadura y con el llamado «Movimiento Nacional», las fuerzas reaccionarias, numéricamente minoritarias, montaron un «sustento de masas» que habían perdido durante el período republicano, cuando salieron a la vida política ingentes masas que habían estado al margen del quehacer histórico. Pero ante la realidad de explotación, de privilegios corruptores y de feroz represión del régimen del gran capital monopolista y de los terratenientes, las clientelas políticas que habían sido atraídas al «Movimiento» con añagazas nacionalistas, por fanatismo religioso y corruptelas, fueron desgastándose bajo los golpes de la lucha de la clase obrera y del agravamiento de los conflictos de clase y por el curso irreversible del proceso de nuevas generaciones. El régimen que pretendió extirpar la lucha de clases con el mito del Estado nacional-sindicalista, se ha visto forzado a cambiar de fachada, a procurarse nuevos equilibrios, dosificando el terror con maniobras de alargamiento de instituciones decorativas, más o menos ficticias (como las Cortes y los organismos del «Movimiento»), mediante concesiones imprescindibles y, especialmente, a través del acomodamiento en puestos lucrativos e influyentes del nuevo personal político y burocrático que ha ido escalando los centros de mando en la vida económica y política, en estos 30 largos años de tiranía y corrupción.

Ese proceso ha llevado a una «desfalangización» paulatina del andamiaje institucional y de la ideología oficial, y a la escalada paralela de la secta en el papel decisivo que hoy cumple la alta burocracia en el sistema del Capitalismo monopolista de Estado. El Opus Dei (Obra de Dios) es una del Opus Dei, favorecida y amparada secta político-confesional con una estructura autocrática que debe su peso y papel relevante al vacío producido

por la destrucción de los partidos políticos y a la quiebra de Falange. El Opus Dei actúa hoy como un Partido de Poder.

Los supuestos actuantes para una estrategia revolucionaria.

Resumiendo se puede decir que entre burguesía y régimen franquista no ha habido, ni hay contradicción de principio. El régimen actual y las «prolongaciones» con que aspira a continuarse (Cortes, Príncipe, etc.) es por su esencia la dictadura del capital monopolista, personificado por la aristocracia financiera. Más aún, este régimen defiende de la manera más absoluta y «rentable» los intereses egoístas de esa oligarquía financiera y de la alta burguesía en general. Por eso, la lucha cotidiana y hoy decisiva contra la forma fascista del Estado monopolista español, no debe eclipsar la esencia reaccionaria de todo el sistema que éste sustenta y representa. El Estado que aspiran a crear las fuerzas populares revolucionarias debe tener necesariamente un carácter antimonopolista, antiburgués y socialista.

Y si la realidad es esa, resulta evidente que la tesis carrillista de la «democracia en la libertad», entendida como un híbrido de socialismo y capitalismo, donde —para decirlo con sus propias palabras— «la opción que se plantea ante la pequeña burguesía, ante el conjunto de la burguesía no monopolista es: insertarse en la perspectiva de una democracia anti-feudal y antimonopolista, coexistiendo y colaborando **durante una o dos generaciones** con las formas de un **capitalismo de Estado democrático**, en el curso de un largo período en el que sus intereses están garantizados, con la perspectiva de una integración personal y familiar progresiva en las formas futuras de la economía socialista» («Después de Franco, ¿qué?», p. 72-73) esta tesis —repetimos— se contradice con la realidad de los antago-

nismos de clase de la España contemporánea. Y cuando calificamos ese enfoque de revisionista no es porque deforma y tergiversa una realidad esencial ya expresada por Lenin y recogida en el Programa del PCE, aprobado por el VI Congreso, la realidad de que en España, «del capitalismo monopolista no se puede volver atrás, a un neoliberalismo económico, como utópicamente sueñan algunos pequeño-burgueses; se puede únicamente ir hacia adelante, hacia el socialismo» (Programa del PCE, 1960 p. 63).

La tesis revisionista de Carrillo no puede ser explicada más que en el cuadro de una claudicación ante las dificultades de la lucha y por el deseo de colocarse dentro de un modelo «europeizado» de la burguesía que él llama «evolucionista», cuyas sugerencias sensibilizan de tal modo a los carrillistas que hasta vocean en su prensa (ver Mundo Obrero del 6-11-70, p. 5) las tesis del Conde de Motrico, coincidentes con la mencionada idea de Carrillo sobre el colaboracionismo de clases. El conde de Motrico aboga por una España europeizada con **«la coexistencia del socialismo y de la iniciativa privada y la integración de los Partidos comunistas en el sistema democrático»**. Y esto es lo que llama Carrillo «aceptar el juego democrático»; ese es su «capitalismo de Estado democrático».

Pero la realidad de España es testaruda. En el terreno de los intereses de clase hoy se enfrentan en España dos orientaciones político-sociales básicas e irreconciliables: la de la oligarquía financiera y sus secuaces, los cuales tratan de sostener su poder asociándose más estrechamente a los monopolios extranjeros y al sistema político-militar del imperialismo, y decorando la fachada institucional para tomar visos «neocapitalistas». De otro lado, la oposición antimonopolista, a cuya cabeza se encuentra la clase obrera.

Para llevar a cabo sus propósitos, la alta burguesía se esfuerza por «integrar» a sectores intermedios y también a elementos activos del movi-

miento obrero. Y sus capitostes más lúcidos sueñan con tener su «partido obrero burgués».

La burguesía comprende perfectamente que las fuerzas que se le oponen o pueden oponérsele por sus intereses de clase irreconciliables, resultarán arrolladoras si a su cabeza marcha una vanguardia aguerrida que mantenga firmemente el timón de los objetivos de clase y sepa actuar y dirigir todo el torrente opositor con la pericia y flexibilidad necesaria para quebrar el dominio político y económico del gran capital y abrir la vía de construcción de un nuevo poder basado en el trabajo.

Como ningún régimen opresor puede sostenerse exclusivamente con la represión desnuda, las fuerzas burguesas dominantes se afanan por desviar y bloquear las aspiraciones de libertad y bienestar de las fuerzas populares españolas, disfrazando sus sordidos intereses con «nuevas» plataformas, más publicitarias que otra cosa, de las que son ejemplo los planes de desarrollo, la llamada política de liberalización y la copiosa legislación social del régimen, que no solucionan, realmente, ningún problema básico del país (ocupación, condiciones de vida, salud pública, vivienda, escuela, derechos cívicos, etc.)

El desarrollo del capitalismo monopolista de Estado ha exasperado el carácter parasitario de la clase burguesa, pues es un hecho que las funciones ejecutivas en la esfera de la producción están siendo cada vez más asumidas por una capa de directivos y burócratas venales que ejercen un poder autocrático en todas las esferas de la vida social, sin otro ideal que el enriquecimiento sin escrúpulos. Estos personajes, que se autotitulan «tecnócratas», pretenden crear una España «neocapitalista» a su imagen y semejanza. Para ello gritan por todos los medios una supuesta idoneidad «técnica», un gusto de la «eficiencia» económica y un culto al confort, con la intención de borrar de la mente de los obreros la idea misma de la lucha de clases.

Pero como los hechos son tozudos y el «neocapitalismo» que pregonan es tan explotador y opresor como el capitalismo a secas, la clase obrera con sus luchas y comisiones obreras está demostrando que no permite que manipulen sus gustos los detentores del poder y los turiferarios al servicio de la burguesía.

La confrontación origina ya hoy un verdadero hipertrofiamiento de «explicaciones» más o menos doctrinarias y un abanico de fórmulas publicitarias destinadas, de un lado, a alimentar la hipocresía y la estulticia de las clases acomodadas y de sus secuaces bienpensantes y, de otro, a estimular una especie de «escapismo» de la política en las masas populares, a las que quisieran «privatizar» en un culto beato a las comodidades de la «civilización de consumo.»

En ese ambiente confuso, es lógico que las dos orientaciones socio-políticas enfrentadas de la sociedad española de hoy, no se presenten netamente diferenciadas en las fórmulas y declaraciones de sus portavoces. La primera orientación, la de la oligarquía, cuya esencia no puede dejar de ser conservadora y reaccionaria, se nos presenta en dos variantes que, para simplificar, llamaremos: gubernamental y opositora. La primera, la variante gubernamental está plasmada hoy en la ideología y en la práctica de la dictadura franquista, cuya finalidad consiste en apuntalar el dominio monopolista con ayuda del imperialismo. La segunda variante, la de la oposición (u oposiciones) burguesas, formulada en una serie de ensayos, artículos y declaraciones (como por ejemplo, el llamado «memorándum de los cuatro»: Areilza, Ruiz Giménez, Sastrústegui y Tierno Galván) persigue también el apuntalamiento del orden capitalista y subordina el futuro del país, su «estabilidad económica y política», a las relaciones con el Mercado Común de los monopolios internacionales y a la asociación de España al bloque agresivo imperialista de la OTAN. Por eso es justo concluir que su esencia es también reaccionaria, siempre que se mire desde el ángulo

de los intereses de la clase obrera y de las fuerzas antimonopolistas. Sin embargo, eso no niega que la variante «opositora» presenta diferencias apreciables, al denunciar los aspectos fascistas de la dictadura burguesa y propugnar derechos y libertades en el contexto de una democracia burguesa, a la que ellos aspiran. Esta diferencia —entre la variante gubernamental y opositora— es una diferencia táctica importante que convierte a esta parte de la burguesía en opositora y que parte de una visión más amplia del futuro porque sabe que tendrá que hacer las cuentas con un movimiento obrero cada vez más poderoso y trata, por ello de encauzar los conflictos de clase en unas estructuras burguesas más flexibles y articuladas. Eso da la medida de las posibilidades y límites de acción concertada con esas fuerzas, para el logro de objetivos intermedios de importancia capital: amnistía, libertades de expresión, de asociación en Partidos y sindicatos de clase, reconocimiento de los derechos de las nacionalidades y reforma del Estado, empezando por la disolución de los organismos policíacos de represión y de los tribunales de excepción.

Toda la orientación de la oligarquía financiera se ha plasmado en una realidad angustiosa para los trabajadores y el futuro que les promete resulta aún más negativo para la inmensa mayoría del país. Consecuencia de ello es la exasperación de una serie de necesidades perentorias que el actual sistema es incapaz de resolver: ocupación, nivel de vida, emigración, vivienda, salud pública, escuela, equipamiento urbano, modernización del agro y equilibrio del medio rural, sin hablar ya de los derechos democráticos que este régimen pisotea totalmente.

Esa situación objetiva amplía el terreno de lucha y de posibles protagonistas de las verdaderas soluciones a los problemas que afectan a las grandes mayorías del país. En esa realidad, las fuerzas obreras revolucionarias y su vanguardia comunista, pueden y deben establecer alianzas o

coincidencias tácticas con fuerzas políticas democristianas, socialdemócratas, liberales, etc., cuyas sugerencias políticas coincidan, más o menos circunstancialmente, con los objetivos que las fuerzas democráticas tienen necesariamente que alcanzar para desplegar su enorme potencial de lucha y decisión. Para ser sólidas y actuantes, tales alianzas deben tener como eje y motor un bloque obrero clasista, cuya formación reclama como primera condición la unidad de acción del P.C. y otras tendencias socialistas y entendimientos de clase con todos los trabajadores, independientemente de creencias religiosas o pertenencias nacionales.

Movimientos nacionales y lucha de clases.

Según se ha visto, la historia moderna de España tiene como eje la lucha entre el proletariado y la burguesía, pero debido a la falta de solución de los problemas planteados por la revolución burguesa (reforma agraria, de la educación y de las instituciones que exigía y exige la separación de la Iglesia del Estado y el encauzamiento de la realidad plurinacional), el antagonismo de las clases sociales ha sido a menudo mistificado con fórmulas abstractas como la «invertebración de España» o con doctrinas fascistas como la del «Estado Nacional-sindicalista.»

Hoy mismo, las clases acomodadas, desde la «Santa Mafía del Opus Dei» hasta los grupos «evolucionistas» de la gran burguesía, aspiran también a soslayar los problemas cruciales de la sociedad con mitologías de nuevo cuño, como la «europeización neocapitalista.»

Pero ni la sangrienta represión, ni las maniobras evasivas de las clases acomodadas pueden impedir que emerjan a la superficie los antagonismos de clase. El sindicalismo único «verticalista» no ha integrado al proletariado que se muestra cada vez más

combativo y organizado. Del mismo modo, la apisonadora totalitaria del Estado nacional-sindicalista no ha podido impedir que la realidad plurinacional —eso que sofística y púdicamente llaman «particularismos regionales»— se imponga incontestablemente a través de múltiples manifestaciones.

Con todo, queda el hecho de que la cuestión nacional sigue siendo una de las más confusas y manipuladas por las fuerzas dominantes, como antídoto de la democracia y del progreso social.

La «cuestión nacional» en España tiene un **trasfondo económico** complejo, vinculado a la incoherencia básica entre campo-ciudad y entre regiones desarrolladas y subdesarrolladas, con niveles desiguales de ingresos, cultura, ocupación, salarios y modos de vida; un contenido político muy palpable —negación rotunda del hecho nacional en la estructura totalitaria que reprime toda manifestación de libertad—, y un fuerte **componente cultural-sicológico**, que pese a la asfixia oficial de los valores autóctonos, es el que encuentra más fácilmente cauces de expresión, a través del uso de la lengua vernácula, del culto religioso, de publicaciones, festivales y canción «protesta», etc.

El rebrote de las expresiones de la personalidad nacional en Cataluña, en el País Vasco, y, más localizado, en Galicia, constituye una manifestación más del fracaso del nacional-sindicalismo y de la crisis de la estructura y la superestructura del capitalismo monopolista de Estado en España.

En la cuestión nacional parece necesario diferenciar dos aspectos que se cruzan, sin ser idénticos. En primer lugar, la nación catalana, vasca, gallega u otras estructuras nación-región son realidades históricas menos palpables que las realidades de las clases y sus antagonismos. Las clases sociales se diferencian por su colocación en la estructura de la propiedad, por el cometido en la producción, por la forma de apropiación, por el consiguiente nivel de vida, «stan-

ding» social y mentalidad. Mientras que la nación está formada por un cúmulo de nexos difusos, menos diferenciales que los lazos de clase. El obrero vasco, castellano o andaluz se identifican plenamente como miembros de una clase desposeída de medios de producción, asalariada y explotada. Además el desarrollo capitalista, con la creación del mercado nacional, con las intensas migraciones de población y el desarrollo de los medios de comunicación, nivela cada vez más las formas de vida y las costumbres y tiende a la «asimilación» forzada en las regiones industrializadas «nacionales». Por eso, los nexos nacionales entre obreros y burgueses resultan objetivamente subordinados a los nexos de clase.

En segundo lugar, lo que hay de «vocación nacional» o de nación en los pueblos hispanos descansa, por lo que acabamos de decir, en una estructura socio-económica monopolista que domina a España entera. Por tanto, para recomponer sobre bases democráticas y con libre autodeterminación de los pueblos, las estructuras y las superestructuras institucionales de las distintas naciones o «grupos regionales» (de que hablaba el eminente historiador Vicen Vives, refiriéndose a Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Andalucía, Valencia etc.) es preciso remover la actual base económica monopolista y barrer al Estado centralista y despótico. Como es lógico, en este terreno también se enfrentan dos grandes actitudes de clase. La de la burguesía, dedicada ya a apuntalar el «orden establecido» con simples retoques de fachada, que sostiene y se sostiene en el Estado autoritario y uniformista. La de la clase obrera y su Partido, que para conquistar la hegemonía en un futuro bloque popular antimonopolista y antifascista ha de articularse como movimiento obrero nacional, gravando en sus banderas las reivindicaciones nacionales y democráticas de todos los pueblos hispanos.

En una sociedad de clases antagónicas nunca ha habido, ni puede ha-

ber, una concepción única de la Nación. El fracaso del monstruoso Estado nacional-sindicalista que pretendía ahogar las contradicciones de clase en la «Nación» totalitaria, denuncia claramente la objetividad y primogenitura de las clases sociales en la sociedad moderna.

Por eso entra dentro de la misión emancipadora de la clase obrera el estimular y desarrollar todo el contenido democrático y progresista de los vínculos unitivos nacionales, rechazando al mismo tiempo todo intento de instrumentar éstos como antítesis de revolución social o como maniobra de presión para defender intereses egoístas de las llamadas burguesías «periféricas». Los obreros no pueden olvidar nunca que el núcleo dominante del capitalismo español tiene en su origen un pacto triangular entre las burguesías de Cataluña, Euzkadi y Madrid. No pueden olvidar que en la España capitalista nunca ha habido una «vocación nacional» única, por encima de las clases y que las fuerzas «nacionalistas» burguesas (como la Lliga, por ejemplo) siempre sacrificaron las libertades nacionales a sus intereses de clase. Pero sobre todo, lo que no puede jamás olvidar, es que «la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos.»

La posición de los comunistas respecto a las aspiraciones nacionales de los pueblos hispanos, ha sido y será inequívoca: Unidad de todas las fuerzas democráticas que luchen por liquidar todo tipo de discriminación, opresión y división de los hombres según su nacionalidad, lengua, creencia, color o sexo; anteponer en todas partes los intereses de los trabajadores, que se identifican siempre con el progreso económico, político y cultural, a todo interés o reivindicación diferencial que obstaculice el progreso y la liberación de las clases trabajadoras. Y coincidiendo con fuerzas nacionalistas en la lucha democrática antifranquista, el PCE rechaza y combate la ideología exclusivista del nacionalismo.

Los comunistas vascos, gallegos, catalanes, andaluces, castellanos o de

cualquier otra región que luchan contra la dictadura fascista, que aspiran a conquistar unas libertades civiles que faciliten el desarrollo del proceso revolucionario, no dejarán nunca de defender con pasión todas las reivindicaciones que contribuyan a esos fines. Pero jamás podrán hacer suyas fórmulas mágicas que identifiquen sumariamente problemas nacionales ya diferenciados por clases, con «los problemas específicos de Navarra, Valencia, Baleares y Canarias», sin explicar en qué consisten esos «problemas específicos» (ver el anti-Mundo Obrero del 30-9-70). La demagogia, en este como en todos los casos, solo genera ridículo y autoengaño. Por eso presentar —como hace esa publicación— «la descentralización y regionalización económica y política» como la «única forma de abordar el gravísimo problema de las desigualdades regionales», es un razonamiento semejante al de aquel inefable cura de aldea que prometía parcelas en el Cielo para despertar en sus feligreses una beatífica disposición al donativo. Los autores de esas fórmulas mágicas ignoran o quieren ocultar que el mecanismo productivo, la división del trabajo social, las proporciones sectoriales, las infraestructuras y hasta la estructura del mercado, —pese a sus desproporciones, estrangulamientos y precariedades— existen a nivel de España entera, a nivel «plurinacional», y que el interés de los trabajadores, el de la perspectiva socialista, no está por principio en desmembrar sino, por el contrario, en concentrar, consolidar y articular racionalmente esas estructuras productivas mediante un plan general y una dirección única que haga rendir el máximo a la economía para impulsar un progreso social, que dé preeminencia a las necesidades sociales de los trabajadores y también a las estructuras socio-económicas más atrasadas de regiones, grupos de población, sectores, etc. La fórmula no puede ser, pues, descentralizar a ultranza, sino descentralizar centralizando democrática y racionalmente con la participación protagónica de los trabajadores. Para

los magos de la política, la dialéctica siempre es aburrida, pero el problema nacional es una realidad dialéctica compleja que no admite «enfoques» mecanicistas y que lejos de excluir —tal vez más que muchos otros problemas— la participación unitaria, coordinada y decisoria de nuevos protagonistas: de los trabajadores unidos y organizados como clase a nivel de España entera.

Los puntos de referencia de una perspectiva revolucionaria.

La realidad de España es muy diferente de la imagen idílica que pintan los turiferarios del régimen. La clase burguesa no tiene más base de unidad que su gobierno y su estado totalitario, como aparato de violencia organizada contra las clases trabajadoras y los estamentos subordinados intermedios, que constituyen la mayoría del país.

Hoy la sustentación de la alta burguesía en la cúspide del Poder está en manos de políticos y burócratas mercenarios que combinan el terror con el engaño sistematizado. Su intención es dar visos de normalidad y respetabilidad al «orden establecido», y muy particularmente, evitar la unidad de las fuerzas antimonopolistas y antidictatoriales.

El equilibrio de las fuerzas dominantes puede ser roto por la acción unida, perseverante y firme de una coalición de fuerzas revolucionarias, bien organizada y dirigida, ruptura que supondría quebrar la base de sustentación económica y política del sistema oligárquico.

El alto grado de interpenetración alcanzado por el poder económico y político en el sistema de capitalismo monopolista de Estado que impera en España, hará que todo cambio revolucionario tenga inexorablemente un carácter antimonopolista —en lo económico— y revolucionario popular —en lo político.

Bajo estas circunstancias la lucha contra la dictadura franquista, por conquistar libertades que permitan al movimiento de masas imponer profundos cambios sociales, puede llevar a la constitución de un gobierno popular revolucionario que quiebre las bases del poder de la burguesía monopolista y sus aliados. En un primer momento eso no será aún el régimen socialista, aunque estará dejando de ser capitalista. Pero a diferencia de la imagen embrollada de Carrillo sobre un «capitalismo de Estado democrático» que se prolongue «una o dos generaciones» y que «integre la burguesía al socialismo», la lógica de la lucha de clases tal como se presenta en la experiencia de todas las revoluciones, permite afirmar que la situación implantada por ese gobierno popular revolucionario sólo puede concebirse como una fase transitoria y de breve duración, ya que la burguesía monopolista y sus aliados no claudicarán jamás sin una lucha desesperada por conservar sus privilegios. Ello exige de la clase obrera una fuerte organización y preparación para todas las formas —pacíficas o armadas— que puede revestir la lucha revolucionaria.

Tal es nuestra interpretación de las tendencias previsibles en España, plenamente coincidente con la experiencia internacional, como se deduce del juicio dado por la Conferencia Comunista Internacional. «A medida que se desarrolla la unidad de acción antimonopolista y antiimperialista, maduran las condiciones favorables para la unión de todas las corrientes democráticas en una alianza política capaz de limitar de una manera decisiva el papel de los monopolios en la vida económica del país, poner fin a la dominación del gran capital y establecer un régimen que realice transformaciones políticas y económicas radicales, creando así las condiciones más propicias para proseguir la lucha por el socialismo.»

La etapa actual de la lucha de clases en España acentúa el carácter antidictatorial y democrático revolucionario de las tareas del PCE y de las fuerzas

populares, por contraste con la forma fascista del Estado burgués. Pero como la esencia de los distintos jalones de la lucha político-social dimana del carácter monopolista de ese Estado, España se ve abocada hoy en día a una revolución antimonopolista popular que constituye la primera etapa en el ininterrumpido camino revolucionario que recorrerá hacia el establecimiento del sistema socialista. Las peculiaridades del desarrollo y el modo concreto del tránsito no pueden ser diseñados de antemano, porque dependen de una serie de factores mudables; de cómo se combinen en el momento dado las fuerzas político-sociales de España y de incidencia de los factores exteriores, o lo que es lo mismo, de la correlación de fuerzas político-militares y económicas a nivel mundial.

En esa lucha antimonopolista, lo determinante es la unidad y la acción de la clase obrera. Para los comunistas los compromisos tácticos y las coincidencias parciales de objetivos entre las fuerzas políticas estarán dentro de los límites que marcan los fines e intereses fundamentales —abiertamente proclamados— de la clase obrera en las diversas etapas de la lucha por el socialismo.

Supuestos teóricos del socialismo a que aspiramos.

Sería realmente peregrino que los marxistas-leninistas, cuya doctrina y organización es la superación científica y práctica del socialismo utópico, incurrieran de nuevo en idealizaciones dogmáticas como la de los clichés carrillistas de «democracia económica y política» y «socialismo en la libertad».

La teoría y la práctica marxista distingue netamente la fase antimonopolista-popular del proceso revolucionario, en la que aún predomina el capitalismo, del periodo de transformación revolucionaria del capitalismo al socialismo —conocido en la termino-

logía comunista como «período de transición». Por su contenido este período de transición sería la realización de las siguientes tareas esenciales:

a) transformación revolucionaria de la estructura económica. Ello implica la adopción de medidas —llevadas a cabo por el gobierno popular revolucionario— que eliminen o restrinjan substancialmente la explotación basada en el gran capital; la nacionalización del complejo industrial de importancia básica para la economía del país.

b) nacionalización de todas las empresas y capitales pertenecientes a los monopolios extranjeros.

c) control de cambios, asumiendo el Estado popular revolucionario el monopolio de la compra-venta de divisas.

d) nacionalización de la banca y de las sociedades financieras y de seguros.

e) realización de una profunda reforma agraria.

f) transformación democrática-revolucionaria del aparato estatal y del derecho.

g) reorientación de la política exterior con el fin de dirigirla a la preservación de la paz y la coexistencia pacífica entre las naciones y Estados.

h) democratización de las fuerzas armadas.

El modelo carrillista de democracia económica y política anula la diferencia de esencia, la naturaleza antagónica de capitalismo y socialismo en una visión interclasista completamente utópica.

La versión carrillista del papel «dirigente pero no dominante» del PCE es un típico ejemplo de deformación oportunista de la teoría revolucionaria del marxismo; versión destinada a escamotear la función hegemónica de la clase obrera y a justificar la renuncia consiguiente a la revolución socialista. Esa versión es falsa porque en la historia real el predominio de todo grupo social se manifiesta siem-

pre —como decía el leninista Gramsci— de dos maneras: como «dominio» y como «dirección» intelectual y moral. Un grupo social es dominante con relación a los grupos adversarios que tiende a «liquidar» o a subordinar, incluso mediante la acción armada, y es dirigente de los grupos afines o aliados. Todo grupo social puede y debe ser dirigente de los grupos afines o aliados ya antes de conquistar el poder gubernamental. Y esta es una de las condiciones principales para la propia conquista del Poder. Pero incluso, cuando ya ejerce el poder y aunque se haya consolidado firmemente se convierte en dominante pero debe seguir siendo «dirigente». En definitiva, toda clase afirma su poder ejerciendo la dictadura sobre las clases antagónicas, pero contemporáneamente debe asegurarse la dirección de las clases y de los estratos sociales afines.

Para disipar el confucionismo conviene aclarar que el Estado es la organización suprema del dominio de un grupo social hegemónico sobre los grupos sociales que le son adversos y subordinados. Todo estado es por su naturaleza la dictadura o coerción organizada del grupo social cuya hegemonía y dominio emerge del control de los medios de producción. Por su estructura jurídica-institucional la dictadura de la burguesía se nos aparece bajo diversas formas: monarquía absoluta o constitucional, república presidencial o parlamentaria. El estado de los trabajadores, cuya esencia es la dictadura del proletariado, se presenta como República federativa de Soviets o como República de Democracia Popular.

La concepción de los «modelos», difundida por los carrillistas (ver por ejemplo «Realidad» n. 17, M. Azcárate «Ciertos aspectos de la lucha ideológica actual»), enlaza directamente con la versión carrillista del «socialismo en la libertad».

Hay, pues, dos maneras de ver el socialismo. La de los «modelistas» que confundiendo la diversidad de formas del Estado proletario (soviets o de-

mocracia popular), de ritmos y modalidades de las transformaciones (confiscación, indemnización, empresa mixta), con la diversidad de «modelos», de «marxismos» y hasta de «estructuras políticas», niegan de hecho los supuestos esenciales o leyes generales del socialismo.

El razonamiento de los modelistas (Carrillo, Azcárate y sus pocos secundarios), consiste en embarullar todos los planos, mezclando, por ejemplo, la estructura económica con la ideología para decir que el marxismo tiene coincidencias con el catolicismo, especialmente «en las zonas ideológicas de la economía» (sic!), que los intelectuales del mundo capitalista «insurgen» contra el régimen de los monopolios y son, sin más, partidarios del socialismo, lo mismo que los obreros explotados, que éstos sí están interesados (por condición socio-económica) en liberarse de la explotación.

Ante este confusionismo, es preciso resumir brevemente los supuestos teóricos del socialismo que queremos para España.

La esencia del socialismo es única y se expresa en las relaciones económico-sociales y en la estructura política básica del socialismo de cualquier país.

Lo mismo que el capitalismo presenta en todas las latitudes rasgos comunes, a saber: la propiedad privada capitalista de los medios de producción; la explotación asalariada de los trabajadores, que producen plusvalía para el capitalista y el dominio político-cultural de la burguesía. El socialismo descansa también en unos supuestos esenciales de vigencia universal: el poder político en manos de la clase obrera; propiedad socialista de los medios de producción (estatal o cooperativa que supone la supresión de la propiedad capitalista por diversas formas de socialización, para poner la producción social al servicio

de las necesidades del pueblo, organizando el trabajo y la distribución con arreglo a un plan económico de conjunto y bajo una dirección centralizada; la retribución con arreglo al trabajo aportado. En todas partes la estructuración socialista de la sociedad supone un proceso de superación de las clases sociales y de transformación del Estado en órgano de autogestión de la comunidad, para lo cual se requiere la dictadura del proletariado, que es el poder político de la clase obrera, como clase hegemónica y dirigente, fundado en un bloque unitario con su aliado natural, los trabajadores del campo, que tiene por objetivo histórico la construcción de la sociedad comunista. Ese proceso exige la organización democrática de todos los trabajadores y su participación decisoria en todas las esferas, bajo las más diversas formas.

Nada más alejado de la visión dialéctica del marxismo-leninismo que una imagen idílica del socialismo sin problemas, en la fase inferior, en aquella que sale directamente del capitalismo, con todas sus lacras y desniveles materiales y humanos. Pero esa dialéctica no obsta para que el socialismo, obra de los hombres y para los hombres, sea desde el inicio un régimen cualitativamente nuevo y distinto del capitalismo. El socialismo solamente puede concebirse como un proceso complejo de ascenso de unas a otras gradaciones de madurez económico-social del comunismo.

El socialismo que los trabajadores construirán en España, descansará en esos mismos supuestos básicos o no será tal. No por que lo decrete una u otra doctrina, sino por la objetividad misma de la sociedad española. En esto como en todo, la magia política sólo aporta confusionismo y, en última instancia, hace el juego a los beneficiarios del «orden establecido», que espoleados por la lucha de clase y ante el descrédito del capitalismo monopolista, también hacen sus gárgaras con palabras «socialistas».

III. El Partido.

«Al ser fundada la Internacional, formulamos con toda claridad su grito de guerra: La emancipación de la clase obrera debe ser la obra de los obreros mismos.»

(Marx y Engels)

El Partido Comunista es la organización política superior de la clase obrera revolucionaria que tiene como base ideológica y guía para la acción, la teoría del marxismo-leninismo.

El PC es la forma superior de organización porque a través de él la clase obrera afirma su mayoría de edad política y postula su candidatura a la dirección de un nuevo Estado, como forma suprema de organización de la vida política de toda la sociedad.

El PC es ante todo la organización política del proletariado revolucionario, que agrupando voluntariamente a los luchadores más conscientes de la clase obrera, de los campesinos, de los intelectuales, forma una vanguardia capaz de dirigir a todos los trabajadores a través de todas las peripecias y etapas de lucha hacia el socialismo.

El PC cumple su misión dirigente mediante la acción política de sus militantes en todas las organizaciones sociales, mediante los más estrechos vínculos con el proletariado y las masas trabajadoras en general.

El PCE es parte integrante del movimiento comunista internacional por-

que los intereses de la clase obrera española son comunes a los de los trabajadores de todo el mundo, porque además se guía por el marxismo-leninismo, máxima expresión de la conciencia de esa comunidad de intereses y objetivos, porque tiene en el imperialismo un enemigo internacional común y porque los intereses de la liberación de los trabajadores sólo pueden alcanzarse con la solidaridad internacional y con el socialismo.

Trayectoria histórica del Partido Comunista de España.

1. El Partido Comunista de España, fundado en 1920, acaba de hacer cincuenta años, tiene una gloriosa historia de lucha por la democracia y el socialismo.

Nacido al calor de la Gran Revolución Socialista de Octubre en Rusia, el Partido Comunista de España vino a superar el reformismo del Partido Socialista y el oportunismo anarcosindicalista para unir bajo los principios del marxismo-leninismo al proletariado

y convertirlo en la fuerza dirigente de la revolución española.

Por su ideología, su táctica y organización, los movimientos socialistas y anarcosindicalistas no resultaban aptos para dirigir a la clase obrera a la conquista del Poder y hacer que esta cumpliera su misión histórica: liquidar el régimen capitalista, la explotación del hombre por el hombre y edificar el socialismo y el comunismo.

El Partido Comunista no aparecía en el movimiento obrero español como un cuerpo extraño, surgía a la vida política formado por los hombres más conscientes del Partido Socialista, que durante la época del desarrollo relativamente pacífico del capitalismo, había desempeñado un papel decisivo en la difusión de las ideas marxistas en España y en la organización del proletariado como clase, arrancándole de la influencia de la ideología de la burguesía liberal y republicana. Más tarde, el Partido Comunista se fortaleció con la incorporación a sus filas de los revolucionarios más clarividentes del anarcosindicalismo, movimiento que había desempeñado también un gran papel en la organización de la clase obrera española.

El Partido Comunista aparecía, pues, como el continuador de las mejores tradiciones del movimiento político organizado de la clase obrera de España. De ahí que el PCE encarnara desde su fundación el revolucionarismo y la combatividad que siempre había caracterizado a ese movimiento, granjeándole en pocos años una gran simpatía y apoyo entre los trabajadores y el pueblo en general, porque como señalaba en su día el marxista español José Mesa en carta dirigida a Federico Engels, el 3 de febrero de 1873: «En este país, el pueblo está siempre al lado del partido más avanzado, pero ante todo y sobre todo, con el partido más dispuesto a la acción.»

Durante los primeros años de su desarrollo, que transcurrieron en la clandestinidad, el PCE tuvo que luchar por su unidad ideológica contra el lastre de las desviaciones sectarias y oportunistas, en cuya lucha fueron

formándose los comunistas que constituyeron la base de la organización del Partido Comunista de España.

En 1932 fue expulsado de las filas del Partido el grupo sectario-oportunista que detentaba entonces la dirección. Este grupo era un serio obstáculo para el crecimiento del Partido, porque estaba imbuido de una mentalidad pequeño-burguesa de jefes insustituibles, rechazaba los métodos de dirección colectiva, pretendía mandar en lugar de dirigir y transformaba el Partido en una secta cerrada de doctrinarios, en lugar de hacer de él un combatiente avanzado, ligado por mil vínculos a la clase obrera y a las masas populares.

A partir de entonces, se inicia una etapa de maduración política y orgánica del Partido, bajo la dirección del obrero comunista sevillano, José Díaz, etapa que coincide con el período de la Segunda República y de auge revolucionario del movimiento obrero y democrático.

Durante la guerra nacional revolucionaria del pueblo español (1936-1939), cuando se pusieron a prueba ideologías, programas, tácticas y formas de organización, la política de unidad obrera y popular para defender la democracia frente al fascismo y estimular el progreso social, elaborada por la Internacional Comunista en su VII Congreso, y que aplicó el Partido Comunista de España, tuvo la adhesión de millones de trabajadores y dio una gran autoridad internacional a los comunistas españoles.

Nuestra guerra, una de las manifestaciones más grandes de solidaridad internacional probó cumplidamente, y la historia de los últimos treinta años lo ha corroborado, que un país no puede defender las libertades democráticas y su independencia nacional aislado, ayer de la Unión Soviética y hoy del campo socialista, ni acometer las ingentes tareas del desarrollo económico, social y político por el camino del socialismo, sin la ayuda y la más estrecha colaboración de los países socialistas, encabezados por la URSS.

De ahí que el carácter eminentemente internacionalista del movimien-

to obrero español, que ha sido igualmente una de las constantes del Partido Comunista como partido marxista-leninista, se enraizara todavía más en el pueblo trabajador durante la guerra nacional revolucionaria, y que perdure en él de manera indeleble, afrontando la prueba del tiempo y las vicisitudes de los últimos decenios, el reconocimiento de lo que significa la Unión Soviética, el primer Estado obrero y campesino que abrió una nueva era en la historia de la Humanidad.

Con su actividad práctica los comunistas hicieron durante nuestra guerra aportaciones a los problemas de la revolución y del movimiento comunista y obrero, cuya valoración y teorización están aún por hacerse.

En aras de los más elevados ideales de libertad, justicia y progreso social, los militantes comunistas españoles derrocharon iniciativa, combatividad y abnegación, primero, durante nuestra guerra nacional revolucionaria y, después, bajo el terror de una feroz dictadura fascista y en los campos de batalla de la segunda guerra mundial, dejando para su constancia una tumba, un acto heroico, la más de las veces anónimo, en todos los lugares por donde pasó la vorágine de la lucha a muerte contra el fascismo y por la salvación de la Humanidad.

2.— La actividad de un partido como el Partido Comunista de España, que había pasado por una prueba tan complicada y difícil como la de la guerra nacional revolucionaria, no podía estar exenta de errores y debilidades.

El error más grave fue sin duda el que la dirección del Partido incurriera en su actividad, sobre todo en el último período de la guerra, en un marcado subjetivismo.

Los dirigentes del Partido no adoptaron las medidas necesarias para dejar en los territorios que abandonaba el Ejército Popular, a causa de la superioridad en armas de las tropas fascistas, organizaciones clandestinas del Partido, para crear un aparato ilegal de carácter nacional, en caso de que los enemigos jurados del pueblo

español aplastaran a la República democrática.

La dirección no advirtió que la lucha por la democracia y el socialismo no acababa con la posible derrota de la República, sino que continuaría, como ley imperiosa del desarrollo histórico, en otras condiciones, todavía más difíciles, y que para esa eventualidad había que preparar al Partido y a todos sus militantes.

Los partidos revolucionarios, escribía V. I. Lenin, deben comprender que «no se puede triunfar sin saber desplegar la ofensiva y retirarse con acierto», que los partidos deben estar preparados para el flujo y reflujo de la revolución y predispuestos siempre a organizar el paso de una forma de lucha a otra, ora violenta, ora pacífica.

Como resultado de esa imprevisión decenas de miles de comunistas quedaron abandonados a su suerte bajo las garras de la dictadura franquista, sin una organización que les sirviera de escudo para parar los golpes de la represión, sin un aparato ilegal y una dirección clandestina que les orientara y dirigiera en aquellos trágicos momentos para defenderse a sí mismos, y al Partido, y para proseguir la lucha.

Los intentos que la dirección del Partido hizo en años posteriores para organizar la lucha en el interior del país, chocaban no sólo con el régimen terrorista implantado en España y con los efectos de la derrota que pesaba como una losa sobre el pueblo español, sino también, y principalmente, con la falta de la más elemental organización clandestina del Partido, lo que creaba dificultades ingentes, costaba torrentes de sangre y daba resultados muy limitados en comparación con el sacrificio de los comunistas, pese a que estos hacían alarde de heroísmo, iniciativa e improvisación.

Las causas de todos estos errores y deficiencias, que se dejaron sentir de manera muy negativa —como hemos dicho— en el último período de la guerra y, sobre todo, después de la caída de la República y de la im-

plantación del fascismo, se debe fundamentalmente a la débil formación ideológica y teórica del núcleo dirigente del PCE.

En el Partido Comunista se reflejan como en un espejo el poco desarrollo del capitalismo en España, país agrario-industrial con fuertes supervivencias feudales, la división de la clase obrera, con grandes influencias del reformismo y el anarcosindicalismo, y, en particular, la debilidad ideológica del movimiento obrero español, que carecía de auténticos intelectuales marxistas-leninistas.

Por consiguiente, la Dirección del Partido, a pesar de la ayuda que recibió de la Internacional Comunista, reflejaba, por su formación y procedencia, las características peculiares de España en cuanto a su nivel de desarrollo y debilidad ideológica del movimiento obrero.

Esta falta de formación del núcleo dirigente del Partido permitió, además, que durante los años de auge revolucionario de la Segunda República y, más tarde durante la guerra, cuando el PCE intervino directamente en las labores del Gobierno, accedieran a puestos de dirección del Partido elementos turbios, aventureros y nulidades morales.

En el corto período de su dirección, José Díaz —seriamente enfermo además— no pudo constituir en torno a sí el grupo de dirigentes que exigían las ingentes tareas del Partido y los arduos y complicados problemas que tuvo que afrontar.

Naturalmente, que sin educarse a sí misma, la Dirección no podía educar a las masas de militantes procedentes de todas las clases y capas sociales que acudieron en masa a engrosar las filas del Partido Comunista, el partido de los combatientes y de la revolución.

Como es lógico, la mayoría de estos militantes no estaban preparados para afrontar las tareas que se presentaron ante ellos al día siguiente de la derrota de la República y para dirigir a la clase obrera en las difíciles y complejas condiciones de la clandestini-

dad y las persecuciones. Esta situación habría sido paliada de haber habido una dirección con el mínimo de organización ilegal, de haber quedado en el país el número necesario de dirigentes en todos los escalones y debidamente resguardados; pero por falta de esa organización, millares de comunistas, con experiencia y combatividad, unos eran perseguidos como alimañas, refugiándose en el monte, otros, asesinados o encarcelados y otros tenían que exiliarse.

De otro lado en el Partido no existía una tradición de democracia, cuyo exponente era la pasividad del Comité Central, e incluso del Buró Político, dominado por el Secretariado. La elaboración de la política no era obra colectiva del Partido, sino de una parte de la Dirección. No había un control de los dirigentes por las organizaciones de base y los militantes, lo que creaba en aquéllos una concepción jerárquica que se expresaba en la creencia de que los puestos de Dirección eran inamovibles y concedidos a perpetuidad. En muchos casos, esta creencia llevaría más tarde a algunos camaradas a una degradación de su condición de comunistas y dirigentes obreros. Esta carencia de democracia interna, de falta de dirección colectiva, se agravó en la emigración durante la cual muchos dirigentes se consideraron como la «personificación» de la gran gesta de la clase obrera y del pueblo y sobre todo con la dispersión del Partido producida por la pérdida de la guerra y el comienzo del conflicto mundial en Europa. Los miembros del Comité Central, incluso del Buró Político, vivían en países de distintos continentes. La Dirección recayó en personas aisladas, desapareció todo atisbo de dirección colectiva y surgieron luchas internas por el poder.

Si no se hubiesen exagerado las dificultades y si no hubiesen predominado los egoísmos, es indudable que habría sido posible una amplia y profunda discusión de las causas y consecuencias de la pérdida de la guerra y de la actividad del Partido durante ese período, discusión en la que ha-

brían podido participar muchos dirigentes y militantes. Ella habría ayudado a esclarecer los errores y debilidades y a extraer las conclusiones correspondientes, a corregir defectos en los métodos de dirección y funcionamiento del Partido y, por último, a ver en toda su plenitud las consecuencias de la derrota del pueblo español, cual era la verdadera situación en España y qué línea política debía trazarse en las nuevas condiciones creadas en el país, así como las medidas para asegurar su correcta aplicación.

Pero esa discusión no se llevó a efecto por la responsabilidad que hubiera podido recaer sobre algunos de los miembros del Buró Político, y el resultado no se hizo esperar. En la Dirección se acentuó la desviación hacia la espontaneidad, que creaba campo abonado para todo género de oportunismos. Esta desviación se manifestó en la resistencia a reconocer, sacando las consecuencias debidas, el tremendo revés que habían sufrido las fuerzas de la democracia española, en la idea «infalible» de que el franquismo no podría sostenerse en el Poder y de que el pueblo español no soportaría el yugo de la dictadura fascista, sin tener en cuenta el profundo abismo de sangre que la guerra había abierto entre los españoles, el terror y la demagogia como forma de gobierno, la responsabilidad colectiva de quienes participaban en la llamada «desertización» de España, los cambios socio-económicos que comenzaban a manifestarse en la sociedad española, en fin, el estado de ánimo real y no imaginario de las fuerzas obreras y democráticas, profundamente divididas y enfrentadas, su grado de conciencia y de predisposición a la lucha, su combatividad, la verdadera situación del Partido, su organización, su influencia y sus fuerzas.

En aquellos años la Dirección del PCE no orientó a los comunistas como correspondía a una situación de repliegue de las fuerzas revolucionarias, como exigían imperiosamente las condiciones reales de entonces. Por el contrario, la Dirección del Partido ma-

nifiesta un apresuramiento y una impaciencia para presentar inmediatamente balances triunfalistas de acciones de «resultados» prácticos. Tan pronto se constituía una pequeña fuerza era lanzada al «asador» franquista y se quemaba, frustrándose posibilidades de crear bases sólidas en el país. En lugar de un trabajo paciente, ideológico, político y de organización, que creara una conciencia y fuerza seria, se ponía de manifiesto un determinismo y un triunfalismo desmedido que encubría todos los fallos, deficiencias y errores de la Dirección del Partido. No obstante se mantuvo siempre vivo el espíritu de clase, combativo y patriótico, de la base del Partido, la única fuerza política que ha sostenido en alto consecuentemente la bandera de la resistencia antifranquista en el llano y en el monte, donde el heroico movimiento guerrillero libró durante largos años un desigual combate contra las fuerzas de la represión. Millares de comunistas han luchado contra el desenfreno y la explotación despiadada de los trabajadores por la oligarquía financiera y los terratenientes, contra el terror y las persecuciones, por las libertades democráticas, poniendo a contribución todas sus energías e inteligencia y entregando su vida, en muchos casos.

Todas las fuerzas antifranquistas han tenido que reconocer el gran papel desempeñado por los comunistas en la lucha contra la dictadura fascista y su importante contribución al desarrollo de la lucha de clases y del movimiento democrático. Esa ha sido y es la prueba más palpable de la vitalidad de nuestro Partido, de las ingentes fuerzas con que cuenta y de las enormes posibilidades que encierra para cumplir su papel de vanguardia de la clase obrera española.

3.— Las huelgas y movimientos de protesta de la primavera de 1951 pusieron de manifiesto que en el país se estaba creando una situación nueva, en la que la diferenciación entre «rojos» y «nacionales» derivada de la guerra, era sustituida por una diferenciación más evidente de clases sociales. Se disipaban las ilusiones de

que la solución del llamado «problema español» podría venir del exterior y se hacía evidente que la liquidación del franquismo y el restablecimiento de la democracia dependían fundamentalmente del esfuerzo, de la unidad y la inteligencia de los propios españoles. Esta nueva situación coincidió con profundos cambios que comenzaron a operarse en el movimiento comunista internacional.

En estas condiciones se celebró en 1954 el V Congreso del Partido, a los veinte años de haber tenido lugar el Congreso anterior. Pese a todas sus precariedades, fue este un intento de corregir los defectuosos métodos de dirección y funcionamiento del Partido, de establecer normas democráticas en su vida interna y de «ponerle al día» para que pudiera afrontar los problemas que planteaba la nueva situación en España. Fueron aprobados un Programa y unos Estatutos, se eligieron un Comité Central y un Comité Ejecutivo y se reanimó la vida política de las organizaciones.

El V Congreso fue un buen comienzo, pero Santiago Carrillo, miembro muy influyente en el Comité Ejecutivo, que ocupaba fuertes posiciones en el Partido y se había rodeado de una camarilla numerosa, utilizó la crítica a la orientación política y las deficiencias del Partido —de las cuales él era también responsable directo— para desatar una lucha, primero subrepticiamente y más tarde sin embajes, contra Vicente Uribe, que prácticamente realizaba las funciones de secretario general, y contra Dolores Ibárruri, que ostentaba el cargo oficialmente.

De este modo, criticando defectos reales, desprestigiando a unos y halagando a otros, Santiago Carrillo logró apoderarse en 1956 de la dirección efectiva del Partido, formar un grupo fraccional en los organismos máximos, reforzar los métodos autoritarios y el autobombo y comenzar a imponer a toda la organización su plataforma política oportunista, lo que tuvo consecuencias muy graves para el Partido. En 1960, en el VI Congreso, fue ele-

gido secretario general, dando así estado oficial a una situación que se había creado cuatro años antes.

Tal fue la causa fundamental de que en el PCE no calara el espíritu demistificador leninista del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y de que se fueran agravando todos los defectos que venía arrasando el Partido.

Sólo a partir de agosto de 1968, cuando Santiago Carrillo y su grupo fraccional revelan abiertamente su autoritarismo y su oportunismo y se enfrentan con la Unión Soviética y los países socialistas del Pacto de Varsovia, con motivo de los acontecimientos de Checoslovaquia, este grupo se desenmascara abiertamente y se exterioriza con todas sus consecuencias la crisis política que venía incubándose en el interior del Partido.

Así se engendra y aparece en el Partido el fenómeno político oportunista del «carrillismo», que se manifiesta en todos los terrenos: en el de la organización, en el ideológico y en el político.

En el terreno de los principios de organización, el carrillismo se expresa por un sentido liquidacionista del Partido, como Partido marxista-leninista, que puede resumirse en los siguientes puntos:

- a) métodos de administración unipersonal,
- b) concentración de todo el poder en manos del secretario general secundado por otros dirigentes incondicionales a su persona.
- c) subordinación de la política del PCE a los intereses personales del núcleo burocrático de Dirección, y
- d) fomento del autoculto de los jefes, como supremos hacedores del destino histórico y encarnación única del Partido en abstracto.

Su deformación principal consiste, pues, en la sustitución del centralismo democrático por el centralismo burocrático, o sea, en la sustitución de los órganos de dirección política por órga-

nos de administración, propiciando el caciquismo en las filas del Partido.

En lugar de dirigir el Partido por medios políticos a través de organizaciones regulares, se dirige a través de un aparato de funcionarios, encargado de transmitir las instrucciones de Carrillo y su grupo y de controlar su cumplimiento, transformando ese aparato en un «partido» dentro del Partido.

De tal suerte el Comité Central, e incluso el Comité Ejecutivo, se convierten en altas instancias de registro, que aprueba pasivamente, como máquina de votar, las decisiones y la línea política fijada por una minoría muy pequeña.

La práctica burocrática carrillista se pone de manifiesto también en los Congresos, órganos máximos de dirección, que tienen la misión de establecer las líneas generales de la política que ha de seguir el Partido. La elección democrática de los delegados, dentro de los límites de clandestinidad, ha sido sustituida por la «designación a dedo», de lo que resulta que, en su inmensa mayoría los delegados son personas que siguen ciegamente las orientaciones de Carrillo y que, en muchos casos, carecen de representatividad, no gozan de autoridad en sus respectivas organizaciones y en ocasiones, hasta son repudiados por sus propios camaradas. En tales condiciones ¿cómo pueden llegar a los Congresos las opiniones de las organizaciones, la voz de los militantes, las ricas iniciativas de la clase obrera y de los sectores democráticos del país?

El carrillismo ha llegado al extremo de celebrar el VII Congreso del Partido y no dar cuenta de él, por razones de «seguridad», ni a las organizaciones ni a los militantes. Estos recibieron un «libro» de Carrillo, que tienen la obligación de leer y repetir como un salmo. Y únicamente con motivo de una felicitación, el Partido se encontró, de buenas a primeras, con que tenía un nuevo Comité Central.

El centralismo burocrático carrillis-

ta ha anulado el derecho de los militantes a la crítica, reconocido por los Estatutos. Para ahogar toda crítica, el carrillismo utiliza una serie de slogans: «La crítica al secretario general, es la crítica al Partido» y «Cuando la caída del régimen está al alcance de la mano, toda crítica debilita al Partido». Cualquier desacuerdo con los planteamientos de Carrillo, hechos en nombre del Comité Central o del Comité Ejecutivo, es calificado de desacuerdo con la línea política del mismo, de intento de resquebrajar su unidad, como trabajo fraccional.

El carrillismo se sirve de la clandestinidad en la que nos vemos obligados a actuar bajo la dictadura franquista, para impedir la aplicación de formas democráticas y estatutarias en la vida de Partido. A las organizaciones y comunistas que se encuentran en la emigración, Carrillo y sus ayudantes les dicen que el Partido está en España y que si quieren discutir que se trasladen allá; a las organizaciones y militantes radicados en el país, les ponen obstáculos en su vida política invocando la clandestinidad y las exigencias de la seguridad del Partido que ellos dosifican a su antojo.

Cuando en el Partido se alzan voces de protesta contra los métodos de dirección autoritaria, Carrillo y su grupo tratan de reducir al silencio disolviendo o dividiendo Comités, células y organizaciones enteras, privan a los militantes de los más elementales derechos estatutarios o los expulsan por centenares; chantajea a los camaradas dependientes de su aparato de funcionarios y tratan de presionar «oficialmente» a los partidos hermanos para que repriman a los comunistas españoles que no se someten a su albedrío.

En esta trayectoria liquidacionista, Carrillo niega también el papel dirigente del Partido. «El papel dirigente del Partido —dice— no consiste en elaborar él mismo finalmente la tesis. Consiste en proponer aquellas soluciones que considere adecuadas». Eso traduce una concepción «mecá-

nica» y pasiva del Partido, que nada tiene en común con el Partido marxista-leninista de la clase obrera, capaz de dirigir, de organizar y llevar tras de sí a las grandes masas trabajadoras para luchar por el derrocamiento del capitalismo y la edificación del socialismo. Es decir, una concepción que sirve para alimentar el equívoco de una verdadera «integración» de clases en una utópica democracia «limpia».

En el terreno de los principios teóricos y políticos, el carrillismo, es una manifestación del revisionismo en la teoría y del oportunismo en la práctica, que su progenitor presenta como expresión del «marxismo creador.»

Esta desviación revisionista-oportunista se ha ido configurando en condiciones complejas caracterizadas por los rasgos que podemos resumir de este modo:

Primero, el exterminio físico de miles de cuadros del Partido, de auténticos combatientes obreros con gran experiencia de lucha de clases, durante la guerra nacional revolucionaria y en el período posterior del más duro terror franquista, debilitó el nivel político de nuestro Partido. En esta situación, con la dispersión orgánica del Partido, fue relativamente fácil la paulatina falsificación de los principios ideológicos, la introducción de métodos despóticos que ahogaban toda posibilidad de discusión y la entronización en los más altos cargos del Partido de gentes sin principios. El carrillismo se ha aprovechado concretamente de esas trágicas realidades.

Segundo, un período de formación de un movimiento obrero nuevo, con instinto clasista desarrollado pero carente aún de suficiente conciencia política. Huérfano de los mejores dirigentes y de una orientación adecuada, tuvo que surgir, la mayoría de las veces espontáneamente, en medio de un apoliticismo dirigido por el régimen, de una furibunda campaña anticomunista y de una opresión dominante de la ideología burguesa.

Tercero, el fracaso de la demagogía

franquista ha conducido a elementos y grupos sociales a buscar nuevos caminos para dar solución a los problemas socio-económicos de España, y muchos de éstos se acercaron al marxismo y al Partido Comunista, trayendo consigo el lastre de la ideología burguesa, y

Cuarto, la influencia ideológica del revisionismo internacional, de una modalidad de revisionismo de nuevo carácter y adaptado a la situación de división del mundo en dos campos (el socialismo y el capitalismo), de un revisionismo estimulado por el anticomunismo del imperialismo y por las teorías burguesas de la reconciliación de clases, que propugnan los «reformadores» del neocapitalismo.

Como parte integrante del revisionismo internacional en el movimiento comunista, el carrillismo minimiza el peso político del campo socialista y particularmente de la Unión Soviética y de su Partido Comunista y siembra en las filas del PCE y del movimiento obrero y democrático español la duda y la desconfianza en el socialismo.

Los carrillistas invocan de palabra una unidad, que niegan con sus acciones y escritos, al tiempo que profundizan la división crean la confusión y multiplican las contradicciones en el seno del Partido. Este, atraviesa por eso una de las crisis más graves de su historia. Entre la Dirección y la base del Partido existe un completo divorcio.

Por la regeneración del Partido.

Para resolver la crisis que aqueja al PCE es insoslayable y urgente barrer de sus filas la desviación carrillista, regenerar el Partido y reconquistar su autoridad, que no surge espontánea y fatalmente.

Los comunistas españoles no tienen más opción que dejar rodar por la pendiente del reformismo a su partido o restablecer en él los principios ideológicos marxistas-leninistas y del

internacionalismo proletario. El dilema no deja lugar a equívocos: o un Partido de reformas sociales o un Partido revolucionario.

La defensa del Partido Comunista, del partido de la clase obrera española, entraña el restablecimiento de esos principios fundamentales, a saber:

- a) La concepción materialista del mundo y de la historia,
- b) el enfoque marxista, de clase de los fenómenos sociales,
- c) la lucha consecuente contra el capitalismo por el triunfo de la revolución socialista,
- d) la lucha intransigente y constante contra el reformismo y el oportunismo, manifestaciones de la ideología burguesa y pequeño-burguesa en el seno del movimiento obrero y comunista, y
- e) el reconocimiento en la práctica del carácter internacional de nuestra causa y nuestra lucha, es decir, el internacionalismo proletario.

Todos esos principios hacen del PCE la personificación de la ideología, la conciencia y la voluntad colectiva de la clase más revolucionaria de nuestra época, de la clase obrera.

A estos principios ideológicos corresponden unos principios de organización que forman con aquéllos un todo único en una relación dialéctica de forma y contenido.

El principio fundamental de organización del PCE es el centralismo democrático, que establece las normas y reglas que regulan la vida interna del Partido, determina la estructura y funcionamiento de todos sus eslabones, garantiza la unidad de sus filas y asegura la acción coordinada y la disciplina de los militantes, disciplina que es aceptada consciente y voluntariamente por todos ellos, a fin de que el PCE pueda lograr sus fines políticos y sociales.

La esencia de ese principio leninista de organización puede resumirse de este modo:

- a) La electividad de todos los órganos del Partido, de abajo arriba,
- b) el rendimiento periódico de cuentas de la gestión de todos los órganos ante las organizaciones del Partido,
- c) la supeditación de la minoría a la mayoría,
- d) la obligatoriedad de las decisiones de los órganos superiores para los inferiores, y
- e) el control de arriba abajo y viceversa del cumplimiento de las decisiones tomadas por el Partido.

Este principio de organización resultado de la combinación de dos elementos fundamentales: democracia y centralización, está llamado, en primer lugar, a asegurar la democracia interna en la vida del Partido, democracia que permita un libre debate político e ideológico, la superación de errores y desviaciones, la corrección de métodos nocivos de trabajo y dirección por medio de la crítica y la autocrítica, democracia que facilita la participación de las organizaciones y militantes en la elaboración de la línea política, la búsqueda constante de nuevas vías que faciliten una intensa circulación de ideas y la máxima utilización de todas las fuerzas de que dispone el Partido.

La aplicación consecuente de este principio de organización debe demostrar prácticamente a la clase obrera, a toda la izquierda española, que el Partido Comunista de España es un partido auténticamente democrático en las palabras y en los hechos.

La centralización, el segundo elemento de este principio de organización, presupone que el Partido Comunista tiene un sólo programa, unos estatutos únicos —obligatorios para todas sus organizaciones y militantes—, que su dirección es también única, debiendo los organismos inferiores cumplir las decisiones de los superiores y que no hay más que una disciplina: la minoría se supedita a la auténtica mayoría.

El centralismo y la observancia de la disciplina son necesarios para que el Partido tenga una voluntad común y asegure la unidad de acción.

El centralismo crea condiciones propicias para el desarrollo de la democracia en la vida interna del Partido y, a la vez, el centralismo se afianza merced al desarrollo de la democracia.

La obligatoriedad del cumplimiento del programa, de los Estatutos y de todas las decisiones importantes presupone ineludiblemente que hayan sido aprobados, luego de discutidos, por las organizaciones y miembros del Partido.

La supeditación de los órganos inferiores de dirección a los superiores presupone también la obligatoriedad de que los Comités de célula, de radio, locales, provinciales y el mismo Comité Central, sean de carácter electivo y rindan cuenta periódicamente de su labor y que esta sea aprobada por los militantes.

De ese modo, la democracia y el centralismo se encuentran en un estado de interacción permanente.

Cuando un Partido se ve obligado a pasar a la clandestinidad para impedir el aplastamiento de sus organizaciones y proteger a sus militantes, se hace necesario e imprescindible cambiar las formas de ejercicio de la democracia, pero aquél no debe incurrir en una interpretación fatalista de la clandestinidad, sino encontrar los métodos de aplicación de la democracia en la vida interna del Partido, es decir, que la restricción de la democracia afecte sólo a las formas de aplicación de ésta, pero no a su esencia.

El Partido Comunista de España, como se ha dicho, ha tenido que actuar durante la mayor parte de su existencia en condiciones de clandestinidad, pero su Dirección no ha sabido evitar las tendencias negativas de una prolongada ilegalidad, ni ha tomado las medidas indispensables para que la restricción de la democracia se limitase a lo objetivamente indispensa-

ble. La Dirección, en lugar de llevar una lucha constante contra las deformaciones del estilo y los métodos de trabajo, las ha convertido en norma de actividad en todo el Partido.

La acción de las fuerzas sanas, que han tomado en sus manos la defensa de los principios ideológicos y de organización del PCE puede parecer, a primera vista, que contradice el principio del centralismo democrático. Tal contradicción es sólo aparente. La oposición a la política fraccional es un deber y nunca equivale a fraccionalismo, puesto que en un partido marxista una fracción presupone: a) falseamiento de las ideas del socialismo científico; b) la infracción del Programa del Partido aprobado por un Congreso, contraponiendo a este Programa una plataforma política propia, y c) violación de los principios del internacionalismo proletario.

La defensa de los principios del marxismo-leninismo se contrapone al centralismo burocrático impuesto al Partido por Carrillo y sus ayudantes, pero no contradice el centralismo democrático, sino que lo restituye en su esencia.

Los Estatutos y la disciplina del Partido quedan invalidados automáticamente cuando una Dirección autocrática, como la carrillista, revisa los principios fundamentales del marxismo-leninismo y para imponer al Partido una política oportunista y antisocialista, pisotea el centralismo democrático, se aparta del internacionalismo proletario, reniega de los principios generales de la edificación del socialismo y propugna tendencias nacionalistas pequeño-burguesas.

La experiencia del movimiento comunista internacional y de nuestro Partido, concretamente, demuestra que la simple plasmación de los principios del centralismo democrático en los Estatutos no es garantía suficiente para que prevalezcan las normas democráticas en la vida interna del Partido, ni eximen de deformaciones de los métodos de dirección y funcionamiento del mismo.

La única garantía consiste en que

cada militante se sienta plenamente responsable de la política de la actividad y del funcionamiento del Partido; en que haga uso de los derechos que le conceden los Estatutos participe activamente en toda la vida del Partido y no tolere las violaciones de su democracia interna.

Esta previsión tiene actualmente una importancia extraordinaria cuando, desaparecida la Internacional Comunista, los partidos son plenamente autónomos y, en muchos casos, ejercen una gran influencia en sus países respectivos.

El Comité Central es el órgano máximo de dirección del Partido entre Congreso y Congreso y a él está subordinado el Comité Ejecutivo que, como bien especifica su nombre, tiene la misión de ejecutar las decisiones del Comité Central.

Sin embargo, en el Partido Comunista de España se han invertido los términos, quien dirige no es el Comité Central, sino el Comité Ejecutivo, o mejor dicho, el secretario general, y a lo sumo dos o tres miembros más de ese organismo, que usurpan todo el poder y las prerrogativas de dictar la política del Partido.

Para que el Comité Central del PCE pueda cumplir sus altas y responsables funciones, deben de desaparecer las prácticas burocráticas carrillistas que hoy lo invalidan.

Las células son la organización donde cada comunista puede hacer uso de todos sus derechos democráticos en el Partido, para discutir, sugerir, criticar y defender la política del Partido. A través de ella, los comunistas ejercen el control sobre los órganos superiores electivos y sobre todos los dirigentes. En la célula se discuten todos los problemas de la política del Partido y son, al mismo tiempo, organismos ejecutores de esa política. A través de las células se comprueba si la línea política trazada por el Congreso y la aplicación de ésta por el Comité Central es correcta y corresponde a la situación política y socio-econó-

mica del momento, a la correlación de fuerzas en presencia. A través de las células se efectúa la unión del Partido con los trabajadores y con las masas populares en general. Los miembros de las células están más cerca de las masas, son parte de éstas, trabajan en su seno. La célula es, de hecho, el eslabón que materializa «la unidad del marxismo con el movimiento obrero», según la célebre expresión de Lenin.

El restablecimiento del principio del centralismo democrático en el Partido devolverá todos sus derechos a las células y estimulará su vida política y el papel dirigente de los trabajadores, dejando éstas de ser organismos administrativos, encargados fundamentalmente de recolectar dinero y vender los «papeles» de Carrillo y su grupo fraccional.

El burocratismo carrillista en la política de cuadros ha conducido a que ningún dirigente ni funcionario responda ante la base del Partido. Lo que Carrillo exige de éstos es la subordinación más completa, el estricto cumplimiento de las órdenes del «jefe». La capacidad, la inteligencia, el tacto para tratar a los camaradas, así como sus conocimientos políticos y culturales, su adhesión a la causa del comunismo, su fidelidad a los principios del marxismo-leninismo, su moralidad, sus méritos contraídos en la lucha, no cuentan para nada. Lo que cuenta, en definitiva, es la incondicionalidad al secretario general. El burocratismo carrillista en la selección y promoción de cuadros abre de par en par las puertas del Partido a trepadores y aventureros que logran introducirse en el aparato y en los organismos de dirección del Partido.

La experiencia del movimiento comunista internacional y las enseñanzas de los clásicos del marxismo-leninismo muestran el papel de los hombres en el curso de la historia, en la elaboración teórica y en la actividad política. Muestran también que ese papel sólo pueden desempeñarlo cuando su actuación práctica, ideológica y política, concuerda con el desarrollo his-

tórico, cuando coincide con los intereses de las clases más avanzadas de la sociedad.

Esta tesis aconseja que a la Dirección máxima del Partido y a los puestos dirigentes de las organizaciones, vayan los hombres más idóneos para cada trabajo, los más aptos para las condiciones concretas en que debe desenvolverse su actividad.

La estabilidad y continuidad de una Dirección no se logra siempre con la inamovilidad de los individuos en los cargos de mayor responsabilidad del Partido. Para asegurar esa estabilidad y continuidad muchas veces es preciso cambiar a unas personas por otras más aptas, más capaces y más adecuadas para determinados momentos y situaciones. Sin embargo, en el marasmo actual se mantiene años y años en cargos importantes a camaradas que no responden a las necesidades del Partido, en muchos casos inutilidades desprestigiadas, causando serios perjuicios a la labor de dirección y creando hábitos negativos que deforman la educación de los militantes. De ese modo se cierra la necesaria promoción de los mejores militantes a la dirección del Partido, se cierra el paso a las fuerzas jóvenes que dan nuevo brío y traen «aire» nuevo al trabajo de dirección. Un dirigente debe ser relevado de sus funciones si así lo demandan las necesidades del Partido, sin que ello signifique una negación de sus méritos o el desdoro de su persona. La autoridad, la división de funciones y la responsabilidad, no tienen nada de común con la jerarquización ni con la noción de «gobernantes y gobernados», ni con el autoritarismo, contrarios a la naturaleza misma del marxismo leninismo y del Partido revolucionario de la clase obrera.

La crisis existente en el Partido Comunista de España exige, pues, una renovación de los cuadros y de la dirección, una reestructuración de sus organizaciones, exige que rijan en él las normas y reglas leninistas de organización, basadas en el centralismo democrático, garantía de su unidad.

Exige una amplia democracia en la vida interna del Partido, la observancia de la dirección colectiva, la estrecha ligazón entre la Dirección y la base, entre el Partido y las masas; exige recusar toda manifestación de autoculto a la personalidad; exige el desarrollo de la crítica y la autocrítica, abriendo amplio campo a la actividad política de todos los militantes.

Los principios de organización leninista demandan igualmente la creación de una Comisión de Control Político de la actividad de todos los dirigentes y militantes del Partido, llamada a velar por el cumplimiento del Programa, de los Estatutos y de las decisiones de los órganos superiores de dirección del Partido, como también la constitución de una Comisión de Finanzas que controle los recursos y bienes del Partido, y que registre los ingresos y gastos. Estas Comisiones, que deben ser independientes del Comité Central tienen que ser elegidas en los Congresos.

La degeneración carrillista de los principios políticos y de organización del Partido hace necesario que en los actuales Estatutos, ley fundamental que rige la actividad de las organizaciones y los militantes, se introduzcan las enmiendas indispensables y se hagan las adiciones correspondientes para evitar o tratar de impedir la violación de la democracia interna y la conculcación de los derechos de los comunistas.

Ante las graves acusaciones que pesan sobre Santiago Carrillo es necesaria la constitución, lo más rápidamente posible, de una Comisión, constituida por militantes de probada responsabilidad y que gocen de la confianza de la inmensa mayoría del Partido, encargada de investigar a fondo las conductas del «secretario general» y de otros dirigentes desde el comienzo de la guerra de España. Cualquier persona con un mínimo de honestidad y responsabilidad política tendría que aceptar esta propuesta presentada por Enrique Lister. No parece esa la intención de Carrillo y de otros incondicionales a su persona,

que dejando de lado toda sombra de dignidad y moral revolucionarias, se aferran a sus puestos de dirección. Los comunistas y la clase obrera española impondrán, pese a todas las oposiciones, esa Comisión Investigadora.

Repetiremos una vez más: estamos por la unidad del Partido, somos firmes partidarios de una disciplina férrea y de la unidad de voluntad y de acción de todos los comunistas españoles. Pero esa unidad y disciplina que tiene un carácter consciente y voluntario dimanar directamente de la ideología marxista-leninista. En un verdadero partido marxista-leninista los principios ideológicos y los de organización constituyen un todo único pero la primacía corresponde a los primeros que son determinantes y de los cuales se derivan los principios de organización.

Entre unos y otros principios existe una relación dialéctica de forma y contenido, pero la forma siempre se halla determinada por el contenido, sirve al contenido y tiene razón de ser mientras existe el contenido.

Es inconcebible una organización política regida por el centralismo democrático pero ignorando los principios ideológicos del marxismo-leninismo.

El carrillismo, desviación oportunista de derecha en nuestro Partido, es la negación, como ya hemos indicado antes, de los fundamentos básicos de nuestro Partido Comunista. Pero, además, el carrillismo ha deformado igualmente los principios organizativos por los que se rige el Partido.

Esta es la causa de la grave crisis que vive el Partido Comunista de España.

Para restablecer la unidad del Partido, sobre bases sólidas y estables, no queda otro camino que la erradicación del carrillismo. Por eso es justa y revolucionaria la lucha que sostienen miles de comunistas contra el grupo fraccional, oportunista y antisoviético que encabeza Santiago Carrillo.

EL Partido ante las fuerzas obreras y democráticas.

La historia enseña, y el marxismo-leninismo corrobora, que la condición fundamental para la victoria de la clase obrera es su unidad. Esta es necesaria tanto en la lucha por las reivindicaciones inmediatas, políticas, sociales y económicas, como en la lucha por el socialismo y el comunismo.

Para lograr la unidad de la clase obrera, los Partidos Comunistas luchan por extirpar del movimiento obrero las tendencias reformistas, revisionistas, oportunistas, tanto de «izquierda» como de «derecha»; realizan los máximos esfuerzos por infundir al movimiento obrero una conciencia de clase, por darle conciencia de su fuerza y de su misión histórica, por inculcarle las ideas del marxismo y del socialismo científico y las experiencias de los destacamentos victoriosos de la clase obrera internacional, como el de la Unión Soviética y otros países socialistas, por asimilar las enseñanzas de los combates de clase de los obreros de los países capitalistas, por imbuir, en fin, al proletariado de sus países respectivos la noción de que forma parte del ejército mundial de los explotados.

Al lado de los Partidos Comunistas actúan en el movimiento obrero otras organizaciones y partidos políticos de tendencias socialdemócratas, socialista, democrata-cristiana, anarcosindicalista, sindicalista, y una gran masa de trabajadores sin organizar y sin filiación política definida.

Entre los Partidos Comunistas y los demás partidos obreros no existen intereses antagónicos. Ya en el siglo pasado C. Marx y F. Engels escribieron que:

«... los comunistas no forman un partido especial opuesto a los otros partidos obreros. No tienen intereses algunos que no sean los intereses del conjunto del proletariado. No proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar el movimiento proletario. Los comunistas se distinguen

de otros partidos proletarios sólo en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, anteponen y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado independientemente de la nacionalidad; y, por otra parte, en que, en las diferentes fases de la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre y por todas partes los intereses del movimiento en su conjunto.»

Entre las masas trabajadoras afiliadas a los Partidos Comunistas y a otras organizaciones y partidos obreros, incluidas las masas inorganizadas, existen factores objetivos estimulantes de la unidad, como la situación común en el sistema de relaciones de producción y los intereses generales de clase de las diferentes capas de trabajadores.

Esta comunidad de intereses entre la clase obrera y todos los demás trabajadores (campesinos, intelectuales y empleados) sirve de base para la alianza de la clase obrera con todos los sectores sociales que se oponen a la burguesía reaccionaria.

La clase obrera, como la clase consecuentemente revolucionaria de la sociedad contemporánea, ligada a las formas modernas de producción y que marcha a la cabeza del progreso social, está llamada a ser la fuerza dirigente, hegemónica, de la lucha de todo el pueblo por la democracia, de la lucha de todos los explotados por la revolución socialista. La clase obrera, liberándose a sí misma, libera a toda la sociedad.

Más para desempeñar este papel dirigente, hegemónico, se precisa una serie de condiciones: unidad de la propia clase obrera, capacidad para convencer a los demás trabajadores de la victoria inevitable de la lucha contra la burguesía y los monopolios, organizados hoy en el sistema del capital monopolista de Estado, capacidad no sólo para defender sus intereses, sino también los de otras capas sociales y, de este modo, ganar la confianza e influencia en estas fuerzas. Es decir, demostrar a todos los

aliados de la clase obrera, que sólo bajo su dirección pueden alcanzar su propia emancipación social.

No obstante, la desviación revisionista-oportunista de Carrillo y su grupo subestima el papel independiente y hegemónico de la clase obrera y la función que compete a ésta como eje de toda alianza de fuerzas sociales en la lucha antimonopolista y en la transición al socialismo y, a la vez hiperboliza la radicalización de las capas medias urbanas, del estudiantado y la intelectualidad, borrando los límites que separan a la teoría marxista-leninista de las construcciones ideológicas «neomarxistas», tan en boga en la Europa «neocapitalista». Precisamente de esa subestimación del papel de la clase obrera surgen las consignas carrillistas de «Alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura» y del «Pacto para la libertad», «como cima de la estrategia de la lucha de clases», así como la de «Huelga Nacional», consignas mágicas llamadas a liquidar a la dictadura franquista.

La «Alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura» no es nada original ni derivada «objetivamente» de la realidad española, como pretende Carrillo. Es un plagio «españolizado», de las concepciones del revisionista francés Garaudy —maestro pensante de Carrillo— y una falsificación de esa realidad. Uno y otro presentan sus elucubraciones como una superación del «nuevo bloque histórico de fuerzas sociales y políticas» —destinado a derrocar el bloque histórico de la burguesía dominante— del leninista italiano Antonio Gramsci, concepción esta que supone la alianza obrera-campesina y la hegemonía del proletariado. En realidad, entre el tandem Garaudy-Carrillo y la concepción del leninista Gramsci hay la misma diferencia que entre el marxismo revolucionario y el revisionismo oportunista.

Así pues, la «Alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura» presupone no sólo ignorar el papel dirigente, hegemónico, de la clase obrera en la lucha por la democracia y el socialismo, y considerar superada la alian-

za obrero-campesina, sino que también supone la absolutización del progreso científico y técnico, de la cual él deduce la «proletarización» de intelectuales y estudiantes, que Carrillo convierte en una de las fuerzas motrices de la revolución española, «en una ruedecita más del mecanismo de producción capitalista», cuando ni en España ni en ningún otro país forman una clase social específica, ni se han transformado en bloque por su condición social, en una fuerza de trabajo igual que los obreros.

Un sector de los intelectuales participa de la producción (otro comparte funciones ejecutivas capitalistas con funciones técnico-productivas) y pasan a ser trabajadores asalariados, pero por sus condiciones de vida y «standing» social se diferencian apreciablemente del proletariado.

El cometido de los intelectuales asalariados en la lucha revolucionaria nunca puede depender de lo que piensen sus sectores radicales y politizados, sino del lugar real que ocupan en la producción, en la ciencia y en la enseñanza. En España los intelectuales de la ciencia y la producción son una ínfima minoría, aunque eso no descarta su significación como aliados potenciales de la clase obrera.

Nunca debe olvidarse que la colocación política de los intelectuales y la dirección de su empuje, dependerá fundamentalmente del grado de hegemonía conquistada por la clase obrera en el movimiento democrático y antiimperialista, de los lazos de ésta con sus aliados naturales (campesinos trabajadores y capas semiproletarias en general), y que esa hegemonía es una labor consciente que incumbe al partido marxista-leninista. Es eso lo que nos enseña la teoría y la experiencia histórica de todas las revoluciones, desde Octubre de 1917 hasta la revolución cubana.

En el documento principal de la Conferencia internacional de los Partidos Comunistas y Obreros se plantea esta cuestión de los intelectuales de la siguiente forma:

«La alianza de los trabajadores manuales e intelectuales es una fuerza cada día más importante en la lucha por la paz, la democracia y el progreso social; por el control democrático de la producción, las instituciones culturales y los medios de información; por el desarrollo de la instrucción pública en bien del pueblo.»

De ese planteamiento que consideramos correcto, al certificado de «fuerza motriz de la revolución» que extiende Carrillo a los intelectuales y estudiantes hay un abismo.

El segundo «slogan» que está en el orden del día de la propaganda de Carrillo es el «Pacto para la libertad», que se quiere comparar con el Pacto que pasó a la historia con el nombre de «Pacto de San Sebastián», resaltando sus lados positivos pero ocultando los aspectos y consecuencias negativas que tuvo para la Segunda República al colocar a la clase obrera a remolque de la burguesía como su peon de maniobra, y que debiera ser una gran enseñanza para futuras etapas de la revolución española.

Carrillo y su grupo oportunista pretenden subordinar la lucha de la clase obrera, la acción de los campesinos y de todos los trabajadores al logro de un idílico «Pacto para la libertad» con los grupos y bajo la dirección de la oposición burguesa. Pero el objetivo fundamental de estos grupos es —como ya vimos— apuntalar el sistema monopolista y subordinar la futura «estabilidad económica y política» del país a las relaciones del Mercado Común de los grandes monopolios, al tiempo que abogan por la entrada de España en la O.T.A.N.

En las aspiraciones de esos grupos de la oposición burguesa se encuentra también la «integración» de la clase obrera y si fuera posible del Partido Comunista de España, en el mecanismo del «neocapitalismo» español, para establecer un clima de «convivencia» de clase o paz social y un «limpio juego democrático» que no amenace la hegemonía política de la burguesía, de toda la burguesía en tanto que clase.

Estos grupos comprenden perfectamente la amenaza que representa para la estabilidad del régimen capitalista el **verdadero y real movimiento de oposición** a la dictadura franquista, movimiento integrado por la clase obrera, los campesinos, los amplios medios trabajadores no proletarios y estamentos intermedios, cuyo nivel de organización y conciencia crece sin cesar y cuya combatividad va también en aumento, aunque todavía es insuficiente para demoler con una acción unitaria los cimientos político-institucionales del bloque dominante.

Independientemente de sus contradicciones, la clase burguesa es plenamente consciente del peligro que supondría para ella el que a la cabeza de ese movimiento de oposición popular, se pusiera una vanguardia aguerreda, que mantuviera firmemente el timón de los objetivos de clase y supiera actuar y dirigir todo ese movimiento con la flexibilidad necesaria para aglutinar a todas las fuerzas aptas para derrocar el poder político y económico de la oligarquía y crear un nuevo poder basado en el trabajo.

Naturalmente que los grupos de oposición presentan diferencias apreciables al denunciar los aspectos fascistas de la dictadura burguesa y postular derechos y libertades cívicas junto a una forma de gobierno democrático-burgués. Esta diferencia táctica es precisamente la que hoy convierte a esos grupos burgueses en opositores y la que debe guiarnos a los comunistas para medir y comprobar sus posibilidades y límites de acción.

El Partido Comunista de España está obligado a tener contactos, conversaciones, a dialogar con las más diversas fuerzas y partidos políticos, a buscar acuerdos y compromisos circunstanciales con grupos democristianos, socialreformistas, monárquicos, liberales y otros para objetivos concretos, como la amnistía de presos y exiliados políticos, las libertades de expresión, de asociación, sindical y otras, el respeto de los derechos nacionales de Cataluña, Euzkadi y Galicia, la disolución de la brigada político-social, la supresión de los tribu-

nales de excepción, etc. Pero al mismo tiempo el PCE no debe olvidar una cuestión esencial: que los acuerdos y compromisos sólo son aceptables para hacer avanzar el movimiento revolucionario y facilitar la conquista de los objetivos fundamentales del proletariado; que ellos no deben perjudicar en lo más mínimo la independencia política de los comunistas y, menos aún, convertirlos en prisioneros de los adversarios de clase; que los acuerdos y compromisos de carácter táctico con otros grupos y partidos no proletarios en el curso de la lucha revolucionaria, del paso de la fase democrática a la socialista, cuando se ventila muy seriamente la suerte misma de las clases, pueden y deben ser modificadas en función de las nuevas condiciones y de la nueva correlación de fuerzas.

La constante de un Partido Comunista es, en este orden de cosas, su sabiduría para combinar una actitud consecuente y revolucionaria de los principios con la máxima flexibilidad táctica.

El tercer «slogan» del carrillismo es la mítica «Huelga Nacional» que de un modo pacífico debe dar al traste con la dictadura franquista y el poder de la oligarquía financiera española.

Dejando de lado que esa «Huelga» o «levantamiento cívico» descansa en una serie de supuestos que prácticamente equivalen a una situación revolucionaria, Carrillo la examina como un producto exclusivo de la «voluntad nacional», como «la aparición en la liza político-social de una amplia alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura». Igual que las demás consignas de Carrillo, esta traduce el más puro oportunismo. Para que las masas puedan pasar de la protesta a acciones decisivas revolucionarias contra un enemigo como la dictadura franquista, que no es ni mucho menos un «tigre de papel», se necesita una situación revolucionaria, inexistente hoy en España y que no puede crearse con llamamientos a la «Huelga Nacional». Esa situación supone un auge revolucionario en todo el país, que abarque a todas las clases sociales y princi-

palmente a la clase obrera y a los campesinos; que se agudice en sumo grado la lucha de clases y que como consecuencia de la lucha conjunta de las diferentes clases y capas, los partidos políticos y organizaciones que la representen lleguen a un compromiso, que la unidad de la clase obrera sea el centro de la alianza de estas fuerzas, y que el Partido Comunista de España conquiste el papel de vanguardia en la dirección y organización del movimiento. Otra cosa es caer en el anarcosindicalismo, del cual tiene el movimiento obrero amargas experiencias.

Para llevar a cabo una revolución, hacen falta condiciones revolucionarias, fuerzas con conciencia revolucionaria, encabezadas por la clase obrera y un Partido revolucionario, libre de revisionismos y oportunismos. La regeneración de ese Partido, esa es la tarea central de los comunistas y de todos los revolucionarios españoles.

Los obreros, los campesinos y las masas trabajadoras no entienden las consignas carrillistas de «Alianza de las fuerzas del Trabajo y de la Cultura», «Pacto para la Libertad» y «Huelga Nacional Pacífica». No las entienden y no las hacen suyas. Por

eso mismo están destinadas al más rotundo fracaso.

Oportunismo: política y práctica que, soslayando las contradicciones sociales y sobreestimando la importancia de las situaciones coyunturales, supedita los intereses de la clase obrera a los intereses de la burguesía.

Frecuentemente el movimiento obrero expía sus pecados oportunistas con desviaciones izquierdistas y explosiones anarquistas que despilfarran su energía revolucionaria.

Revisionismo: corriente antimarxista que, instalada dentro de los Partidos Comunistas, desvirtúa los principios y nociones fundamentales del socialismo científico. Enmascarándose con el slogan de «libertad de crítica», introduce una reconsideración anti-científica del marxismo que se resume en la «absolutización» de lo cambiante en el mundo actual, en la subestimación del papel de la teoría revolucionaria y adulteración de la función de la práctica.

Como fenómeno ideológico internacional, el revisionismo presenta hoy diversas modalidades, una de las cuales es el «carrillismo».



POSICION DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA CON RESPECTO A LAS FUERZAS SOCIALES.

1.— El PCE lucha por la unidad de la clase obrera, por la creación de un sindicato único de clase, democrático e independiente; apoya el movimiento de las Comisiones Obreras y otras formas unitarias de organización del proletariado y hace suyo el programa reivindicativo de mejoras salariales, de derecho de huelga, de asociación y expresión, de amnistía y de anulación de la legislación represiva. Al mismo tiempo expresa su actitud de aprovechamiento con fines revolucionarios de las posibilidades legales y su repudio vigoroso del adefesio de Ley dical y de todo el tinglado verticalista.

Sin embargo, en este esencial cam-

po de actividad se manifiesta también muy agudamente el oportunismo de Carrillo y su grupo, que tratan de manejar a las Comisiones Obreras para sus especulaciones.

Hoy, las Comisiones Obreras y, mañana, el sindicato único de clase por el que luchamos, no pueden ser filiales del Partido Comunista, toda tendencia en este sentido lleva al aislamiento de éste, a que las masas se separen de los comunistas. Por el contrario deben ser organizaciones autónomas, que representen y agrupen a todos los trabajadores, independientemente de sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas. Ello lleva implícito que los miembros de

las Comisiones Obreras o del futuro sindicato puedan afiliarse al partido o grupo político que deseen.

Pero la independencia de las Comisiones Obreras o del futuro sindicato de clase, como la autonomía de los partidos y grupos políticos, no presupone neutralidad en la lucha de clases, ni en política; no excluye, sino que exige la lucha de los comunistas por ejercer en ellos su dirección política. Ahora bien, esa dirección política no se consigue con declaraciones y llamamiento triunfalistas y mendaces —como hace Carrilo—, sino a través de una difícil, compleja y hábil lucha que consiste, en lo fundamental, en ser consecuentes defensores de los intereses de la clase obrera, orientando a las masas en cada momento, participando activamente en el cumplimiento de todas las tareas, desenmascarando las maniobras del gobierno y de los patronos y luchando contra las corrientes oportunistas y reformistas en el movimiento obrero.

El PCE lucha también por conjugar la lucha económica con la acción política, subrayando ante la clase obrera la importancia capital de esta última. Por eso considera que ni las Comisiones Obreras ni el futuro sindicato deben ser ajenos a la política y que el apoliticismo se convierte de manera inexorable en un arma de la burguesía. Ser neutral ante los problemas políticos de España, significa en la práctica renunciar a las transformaciones económicas y políticas. En la situación concreta de hoy, la lucha de clases enfrenta a las Comisiones Obreras —y enfrentará al sindicato futuro— con el Estado y el sistema del capital monopolista entroncado con éste.

Es importante destacar que la situación de los trabajadores españoles no depende exclusivamente de los problemas interiores del país, sino también de la política exterior que aplica la dictadura franquista. Por eso los obreros tienen que luchar, contra la subordinación al imperialismo, concretamente, contra las bases

militares yanquis instaladas en España, contra los complots y masacres imperialistas de Indochina y el Cercano Oriente por una política exterior independiente y de solidaridad activa con las fuerzas antiimperialistas y democráticas de todo el mundo.

Tarea de las Comisiones Obreras y del futuro sindicato son también la educación de la clase obrera española en un espíritu internacionalista de solidaridad con la lucha de los proletarios de todos los países.

2. El campesinado. Es el aliado natural y principal de la clase obrera en la lucha por la democracia y el socialismo. La alianza obrero-campesina es uno de los principios políticos básicos de la actividad general del Partido Comunista de España.

El PCE denuncia la política de expropiación del campo por los grandes terratenientes que con ayuda de los dineros públicos, después de haber culminado un proceso de explotación medieval, han pasado a engrosar las filas de la burguesía en los marcos de un complejo agrario, industrial y bancario, desentendiéndose del necesario equilibrio entre industria-agricultura, ciudad-campo y creando los graves problemas de la emigración, del paro, etc.

La orientación de la política oligárquica da la espalda a la empresa familiar. La posible entrada en el Mercado Común europeo reducirá el área agrícola a unos cultivos selectos de exportación, sellando la quiebra definitiva de las economías familiares dedicadas al cultivo de cereales y a la ganadería. El desarrollo monopolista descansa en la perspectiva de la eliminación a corto plazo de más de un millón de trabajadores del campo.

Los campesinos no pueden aspirar a liberarse por sí solos. Únicamente vinculados a la clase obrera en un bloque revolucionario pueden romper las bases que sustentan el sistema de explotación oligárquico y monopolista y encontrar el camino de su li-

beración en una sociedad de productores libremente asociados.

Santiago Carrillo y su grupo fraccional hablan con frecuencia del campo y de los campesinos, de las comisiones campesinas, popularizan las consignas de la «tierra para quien la trabaja» y, en ocasiones, llaman a «ocupar las tierras no cultivadas». Pero las frases y consignas no pueden encubrir la subestimación del problema campesino por parte de los carrillistas.

En el fondo Carrillo coincidió con los publicistas burgueses y ciertos hombres que se consideran de izquierdas, quienes estiman que el problema agrario está siendo superado por el «éxodo rural», que supone el abandono de muchas tierras y labores de escasa productividad, y que, de ese modo, el problema campesino se resuelve solo.

En realidad el régimen agrario de predominio latifundista y relaciones precapitalistas de explotación se está descomponiendo desde hace años, pero los problemas del campesinado trabajador, los del asalariado del campo, se agudizan sin cesar. El problema agrario y campesino subsiste y se agrava, pese a que sus contradicciones cambien de forma.

Al englobar la alianza obrero-campesina en el concepto «trabajo», y disolverla en la «Alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura», los carrillistas incurren en el fatalismo de considerar que el desarrollo de la agricultura y la solución del problema campesino no tienen solución fuera de la vía monopolista. En rigor, su consigna mesiánica encubre, la falta de un auténtico programa agrario, porque sigue siendo válido, lo que Lenin escribía en vísperas del II Congreso de la Internacional Comunista:

«El proletariado actúa como clase verdaderamente revolucionaria, sólo cuando en sus manifestaciones y actos procede como vanguardia de todos los trabajadores y explotados, como jefe de los mismos en la lucha por derribar a los explotadores, cosa que no puede ser llevada a cabo sin

introducir la lucha de clases en el campo, sin agrupar a las masas de trabajadores rurales en torno al Partido Comunista del proletariado urbano, sin que este eduque a aquella».

Los «modernistas» al estilo de Carrillo podrían decir que esto, justo hace cincuenta años, ya no lo es hoy. Pero la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros ha insistido en que «el fortalecimiento de la alianza obrera y campesina es una de las condiciones fundamentales del éxito de su lucha contra los monopolios y su poder.»

3. Las capas medias urbanas. Formadas por «trabajadores autónomos», parte de la intelectualidad, funcionarios y profesionales liberales, van adquiriendo cada día mayor importancia en la lucha contra el poder de los monopolios y su forma de gobierno, la autocracia franquista. La pequeña burguesía es un componente de la actual revolución social, pero al estar situada entre el proletariado y la burguesía, se muestra, por naturaleza, indecisa, vacilante, poco consecuente, pasando rápidamente del revolucionarismo a la apatía, y pierde las perspectivas de lucha. Por otro lado, la pequeña burguesía por ser un vehículo de introducción en el movimiento obrero de tendencias anarquizantes, espontáneas y pesimistas y, en ocasiones, extremas, puede convertirse en reserva de las fuerzas más reaccionarias y hasta fascista.

El papel de estas capas está condicionado por el grado de hegemonía del proletariado en el proceso revolucionario, en cada momento. No obstante, es posible atraer a las capas medias urbanas a la lucha debido a su condición económica. Ello es, además, necesario para crear el frente democrático antifranquista. En España existen hoy posibilidades para que estas capas se agrupen en torno a la clase obrera en la lucha contra el poder del capitalismo monopolista, por la democracia y la independencia económica y política del país.

El Partido Comunista apoyará aquellas reivindicaciones de las capas me-

días urbanas dirigidas contra los monopolios como terreno de entendimiento y lucha común junto a la clase obrera.

Sobre los movimientos católicos

Entre las tareas prácticas del Partido Comunista destaca el problema de la participación de los católicos en el movimiento obrero y democrático.

Hoy, en la época de transición del capitalismo al socialismo, la Iglesia Católica, que asiste a un continuo debilitamiento de su influencia entre las masas, reacciona buscando caminos de acomodamiento a la realidad objetiva, de «renovación» y puesta al día («aggiornamento») en un intento supremo de contener ese debilitamiento no con excomuniones, sino de evitar de una forma más refinada la penetración de las ideas del marxismo y del socialismo científico en la mente de los trabajadores católicos.

A pesar de la fraseología «izquierdista» de parte de la Iglesia Católica, y en particular del Concilio «Vaticano II», la Iglesia sigue manteniendo una posición de defensa de la propiedad privada, de la explotación capitalista y del poder de los monopolios, aunque propugne al mismo tiempo un neoreformismo de tinte religioso para distraer a las masas de trabajadores creyentes de la lucha política.

La actitud de algunas altas jerarquías eclesiásticas ha cambiado hasta el punto de que critican ciertos postulados de la propia Iglesia, abogan por algunas reformas que, en general no significan ningún cambio radical. Las modificaciones introducidas en la estructura, en los dogmas y en la doctrina por el último Concilio no transforman de manera profunda el carácter del catolicismo como ideología religiosa y por eso no cabe hablar de una «nueva Iglesia».

Sin embargo, es un hecho que la Iglesia ha tenido que hacerse eco de las inquietudes de millones de católicos y bajar del cielo a la tierra para abordar problemas socio-económicos cruciales, reconociendo el derecho de huelga y perfilando más su doctrina social.

Desde mediados del siglo pasado el marxismo ha venido luchando por la unidad de acción de todos los trabajadores, independientemente de sus convicciones políticas, filosóficas o religiosas para llevar a cabo transformaciones sociales y económicas radicales. Paralelamente, las jerarquías católicas se han esforzado por detener el inexorable proceso de descristianización de las masas proletarias y por mantener la división de los trabajadores según sus creencias religiosas a fin de conservar la ascendencia de la Iglesia sobre ellos.

En un país como España, donde la ideología católica conserva una considerable influencia, este problema adquiere capital importancia. Para los comunistas españoles la tarea consiste en incorporar a la lucha económica y política general a los trabajadores creyentes, pues la aspiración de todos los hombres del trabajo a la unidad de acción por sus intereses de clase está objetivamente condicionada y no depende de la relación de éstos con la Iglesia.

La contradicción entre las estructuras institucionales e ideológicas medievales del catolicismo español y la realidad de los antagonismos de clase de la sociedad española ha provocado una profunda crisis en el movimiento católico. Los trabajadores creyentes se incorporan a la lucha contra la explotación capitalista y por las libertades democráticas pese a las presiones que sobre ellos ejercen las altas jerarquías de la Iglesia española.

Se crean nuevas y considerables posibilidades para el diálogo entre comunistas y católicos que no se atienen a las posiciones del anticomunismo, y, sobre todo, para la unidad de acción de todos los trabajadores, independientemente de sus convicciones religiosas, contra la explotación capitalista en general, contra el poder omnímodo de los monopolios y por el progreso, reafirmando una vez más la inconsistencia de la división de las masas según sus creencias religiosas.

La radicalización de los trabajadores creyentes, la combatividad que mues-

tran muchos de ellos en la lucha de clases y su espíritu unitario y de organización es lo que pone a su lado a centenares de sacerdotes como sucede en España.

Sobre la Juventud.

Las preocupaciones y actividades políticas de las nuevas generaciones son rasgos muy destacados de la vida social española actual. Núcleos cada vez más numerosos de jóvenes obreros y estudiantes, inspirados en las ideas del marxismo-leninismo, se entregan generosamente a la lucha por la democracia y el socialismo. Entre la juventud campesina se despiertan también hondas inquietudes por el porvenir democrático y socialista de España y son frecuentes sus acciones contra los explotadores y la dictadura fascista.

Los sectores más avanzados y conscientes de la juventud trabajadora y estudiantil se revelan como dignos herederos de las generaciones anteriores, de los muchachos y muchachas que participaron en el movimiento revolucionario de octubre de 1934, que se batieron heroicamente en los años 1936-1939 por la defensa de la República, que continuaron la lucha contra el fascismo en diversos frentes de la segunda guerra mundial y que, después de 1939, siguieron combatiendo al franquismo en montes y ciudades de nuestro país pese al monstruoso terror fascista.

La lucha de amplios sectores de la juventud española, de la juventud obrera en primer lugar, refleja la profundidad de la crisis de la sociedad burguesa en su conjunto y del régimen de dictadura existente en España muy particularmente.

Esos jóvenes han comprobado que el franquismo es sinónimo de explotación feroz, de represión, de miseria, de oscurantismo y de falta absoluta de libertad. Esos jóvenes se levantan contra la política de las clases dominantes. La lucha de la vanguardia de la juventud española es vista con simpatía y apoyada de una u otra forma por millones de muchachos y muchachas que odian al fascismo.

Los luchadores más conscientes de la juventud de España han comprobado, también, que la solución a sus graves problemas no puede ofrecerla el capitalismo. Ellos son solidarios de los pueblos de Indochina, de los pueblos árabes, de los pueblos de Guinea-Bissao, Angola y Mozambique, de todos los que luchan por su independencia nacional y su libertad; son solidarios de los negros de EE.UU., de los jóvenes de todos los continentes que se oponen al imperialismo. Esas luchas han sensibilizado considerablemente a la juventud española estimulando en ella las ansias de libertad y el odio al imperialismo.

Al mismo tiempo, masas cada vez más importantes de jóvenes obreros, campesinos y estudiantes de nuestro país ven en el mundo socialista la verdadera solución a sus acuciantes problemas. En el socialismo se terminó con la explotación del hombre por el hombre y la juventud tiene abiertas todas las puertas para un porvenir feliz. La Unión Soviética, el primer Estado socialista del mundo, que venció al fascismo en la segunda guerra mundial salvando a la humanidad de la barbarie y de la esclavitud, que ayudó a muchos pueblos de Europa y de Asia a liberarse del capitalismo, que sostiene material y moralmente a todos los que luchan contra el imperialismo, que marcha a la cabeza del desarrollo científico y técnico y que está construyendo ya el comunismo, ha conquistado el corazón y la mente de lo más consciente y combativo de nuestra juventud. En ese ejemplo grandioso se inspiran hoy sectores cada vez más numerosos de la juventud de España.

Los comunistas partiendo de que cada momento del desarrollo social dicta a las gentes sus propias leyes, educamos a la juventud en el respeto de las mejores tradiciones de las generaciones anteriores de revolucionarios —particularmente en la entrega y fidelidad a la causa de la revolución— y en el espíritu del internacionalismo proletario que es, ante todo, la solidaridad con el sistema socialista mundial y con su fuerza más decisiva

la Unión Soviética, con la clase obrera internacional y con todos los pueblos que luchan contra el imperialismo.

El relevo de las generaciones exige la lucha conjunta de las personas de distinta edad, la combinación de la experiencia y madurez de unos con la energía y combatividad de otros.

Los comunistas tenemos el deber de ayudar a la juventud para que comprenda que el descontento y la protesta no basta para transformar el mundo sobre bases progresivas y revolucionarias, que solamente logrará éxitos auténticos en su lucha por un futuro luminoso dominando las leyes del desarrollo histórico, fortaleciendo la unidad de sus filas, uniéndose más y más al movimiento obrero, a la comunidad socialista y a todas las fuerzas revolucionarias del mundo de hoy.

En una palabra, los comunistas tenemos la obligación de educar a las nuevas generaciones en la fidelidad a los principios del marxismo-leninismo y del internacionalismo proletario, la ideología de la clase obrera.

El carrillismo está causando graves daños a la autoridad del Partido entre la juventud revolucionaria de nuestro país. Con su demagogia, con su revisionismo y antisovietismo, el carrillismo ha alejado de nosotros a muchos jóvenes con inquietudes y pasión revolucionaria que rechazan una dirección esterilizante. El carrillismo ha provocado la formación de grupos atomizados que, a menudo, enarbolan consignas primarias de un extremismo inoperante. La juventud trabajadora y estudiantil paga así con el azote del «extremismo» los pecados oportunistas de una dirección incapaz y claudicante.

Las tesis carrillistas sobre la «Rebelión de la juventud» y «los nuevos protagonistas centrales» de la revolución, tesis copiadas de Marcuse, Fisher, Garaudy y de otros teóricos antimarxista, acompañadas con la empalagosa adulación hacia los jóvenes y con orientaciones confusas y, en ocasiones, aventureras, nos plantea a los comunistas españoles tareas

muy necesarias y de urgente realización. En primer lugar la de propagar entre la juventud obrera, campesina y estudiantil las ideas del socialismo científico y las de mostrar claramente los peligros de las diferentes concepciones revisionistas de derecha y de «izquierda», seudorrevolucionarias y aventureras que influyen o pueden influir en determinados núcleos juveniles.

Para llevar a su término todas estas tareas es necesario constituir una fuerte organización de la Juventud Comunista que, inspirada en la ideología marxista-leninista dirija y de personalidad a la juventud trabajadora y estudiantil en la lucha revolucionaria y que asuma, a la vez, la realización de sus necesidades específicas de trabajo, instrucción, participación política y social. La organización de la Juventud Comunista, conservando siempre su autonomía orgánica, debe estar dirigida políticamente por el Partido teniendo muy en cuenta las enseñanzas de Lenin, es decir, «con la fuerza de la energía», de una mayor experiencia, mayor diversidad, mayor talento.»

La mujer española ha trabajado siempre al lado del hombre en las tareas más duras ocupando puestos de peonaje sin calificar, tanto en el campo como en la fábrica y el taller, por un salario inferior al del hombre, constituyendo una mano de obra superexplotada por las clases poseedoras y fundamentalmente a partir de la revolución industrial.

Pero su situación peculiar ha impedido su participación activa en el desarrollo de la sociedad y ha trabado considerablemente su contribución a la lucha revolucionaria.

La agrupación de las mujeres en fábricas, a partir de la era industrial, su incorporación al ejército de los trabajadores asalariados, abandonando el taller artesanal o la reducida comunidad familiar, les permite empezar a tomar conciencia de clase. A partir también de las primeras reivindicaciones sufragistas mujeres de la pe-

queña y media burguesía salen a la palestra política de los grupos humanos discriminados. Su voz se hace oír y los hombres de la clase media y de la burguesía bienpensante, imposibilitados para conocer lo que se ha denominado el movimiento feminista, se vieron forzados a integrarlo al «orden establecido» mediante la expansión formal de ciertas instituciones y derechos.

En España, este movimiento, arrastrado por las mismas peculiaridades del país y sobre todo por la influencia que la Iglesia católica ha mantenido siempre, como fuerza alineante, sobre la mujer, ha sido tímido y apenas seguido mas que por grupos minoritarios de mujeres de la clase media que accedieron a la enseñanza universitaria y algunas intelectuales.

Sin embargo, la lucha mantenida por las mujeres de vanguardia ha impulsado en la actualidad a amplios sectores femeninos pertenecientes al proletariado, que trabajan en los servicios y en profesiones liberales, a tomar conciencia de su situación aliñeada y a organizarse en una lucha aún embrionaria pero que lleva en sí misma el germen de un movimiento democrático y revolucionario que tiende a extenderse rápidamente. Este movimiento defiende un programa democrático y revolucionario que el Partido Comunista de España apoya por entender que sus reivindicaciones deben formar parte de nuestro programa general de lucha comunista.

Acontecimientos históricos de tan gran importancia como la Revolución Socialista de Octubre y la constitución del sistema socialista mundial han dado un impulso decisivo a la lucha emancipadora de la mujer en España y en todo el mundo capitalista.

En el terreno liberal las mujeres exigen igualdad de salarios a trabajos de igual categoría y rendimiento que los realizados por el hombre; exigen, también, iguales posibilidades en el ascenso a categorías profesionales de responsabilidad.

En la educación se proclama por

ellas la necesidad de que los planes de enseñanza contengan los mismos programas para las muchachas que para los varones y que la posibilidad de acceder a estudios técnicos y científicos no esté coartada para la mujer por las dificultades posteriores para ejercer, en igualdad de oportunidades que el hombre, una profesión de las no reputadas femeninas por nuestras tradicionales opiniones sociales.

Es imprescindible, por tanto, una reforma profunda de la legislación civil, que en 1970, mantiene la misma inferioridad de la mujer que el Código Civil de 1889, liberándola sobre todo de la dependencia impuesta para la casada en relación al marido. Es imprescindible la modificación de la actual estructura del matrimonio y de la familia que hace de la mujer una esclava del lavadero y de la cocina y que, en muchos casos, la obliga a escoger el matrimonio como la única posibilidad de asegurarse el sustento. Igualmente, propugnamos la implantación del divorcio por diversas causas, entre las que debe contarse el mutuo consentimiento. Las mujeres luchan por la creación de instituciones mantenidas por el Estado que acojan a los niños desde la más tierna edad, permitiendo así a la mujer realizarse como persona y acceder en igualdad de condiciones que el hombre a la construcción de un mundo socialista.

Somos conscientes de que el problema que confronta actualmente la mujer trabajadora y la de las capas medias es el de la rotura de las bases que sustentan la discriminación real y los mitos: la dictadura de la burguesía con todas sus secuelas y poderosos medios de opresión cultural, moral, social y política. Por eso, la tarea fundamental de los movimientos de liberación femeninos es contribuir, junto a la clase obrera, a la lucha contra la sociedad capitalista y por una nueva sociedad libre de explotadores.

El sexo, como la raza ni el color no pueden ser determinantes de discriminación alguna de la persona en su participación en la sociedad ni en la

lucha por alcanzar el éxito de la Revolución y la posterior construcción del socialismo.

El Partido Comunista de España es consciente de que la toma de conciencia social de la discriminación de que es víctima la mujer en España, debe contribuir a alentar la formación y desarrollo de un movimiento reivindicativo feminista en cuya lucha las mujeres trabajadoras deben irradiar su empuje de clase y las de las capas medias, que son sus aliados naturales, pueden intervenir activamente.

Sobre las Fuerzas Armadas.

Sin olvidar las peculiaridades históricas y nacionales, las fuerzas armadas de España, como en todos los demás países capitalistas, son, en general, el instrumento principal de represión, el instrumento más fosilizado en que se apoyan las clases dominantes, el baluarte más rígido de la disciplina burguesa y del dominio del capital, del mantenimiento y el cultivo de la mansedumbre servil y la sumisión de los trabajadores al capital.

No obstante, las fuerzas armadas no pueden ser nunca totalmente fieles al régimen capitalista al estar integradas por elementos de diferentes clases y capas de la sociedad. En ellas se reflejan, de una u otra forma, todas las contradicciones inherentes al régimen.

En la sociedad dividida en clases, la lucha revolucionaria de las masas trabajadoras arrastra inevitablemente a las fuerzas armadas a la vorágine de los sucesos políticos, como lo prueba el último siglo y medio de la historia de España. Pero no hay que olvidar que el papel de los militares españoles ha dependido siempre, no tanto de las ambiciones de sus personajes más importantes, como de la estabilidad de las instituciones gubernamentales y de la madurez de la sociedad en general.

En los últimos treinta años, después de la guerra nacional revolucionaria, los mandos de las fuerzas armadas son un puntal básico del bloque dominante y Franco el encargado de

asegurar al «partido del Ejército», especialmente a sus más altos mandos, una situación privilegiada en el régimen social imperante. Los jefes superiores de las Fuerzas Armadas ocupan cargos lucrativos en Consejos de administración, Bancos y empresas industriales, en los altos organismos del Estado y en toda clase de instituciones de la Administración. En general, esos jefes perciben buenas remuneraciones y gozan de prebendas y exenciones que, al lado del llamado «espíritu de cuerpo» y de su influencia en el régimen y en la política, hacen de ellos «la columna vertebral» de la actual sociedad capitalista española.

Esa situación especial contribuye a que las Fuerzas Armadas sean muy impermeables respecto a las luchas sociales y políticas que se desarrollan en el ámbito nacional.

Pese a todo, la clase obrera y el Partido Comunista, como fuerza impulsora del progreso nacional, deben prestar seria atención a la extensión de su influencia entre los elementos de origen popular de las Fuerzas Armadas. Esto se refiere, en primer lugar, a los soldados que en su inmensa mayoría son obreros, campesinos y empleados, al cuerpo de suboficiales y a una parte de la oficialidad. Es precisamente en estos sectores de las Fuerzas Armadas, especialmente entre los soldados, donde debe centrarse la actividad del Partido que en nuestro léxico llamamos «antimilitarista.»

Pero el carrillismo, en lugar de prestar atención a esos sectores de origen popular de las Fuerzas Armadas para convencer a unos de que deben estar al lado del proletariado y a todos al lado de las fuerzas democráticas del país, se dedica a cantar ditirambos a generales fascistas, afirmando con aplomo —como durante el Estado de Excepción en la primavera de 1970 con Pérez Viñeta— que no tienen nada que ver con las decisiones represivas del gobierno, que se niegan a actuar en los órganos de represión, que, entre ellos, hay un amplio movimiento de protesta contra

las bases yanquis, en fin, que «la gran mayoría de los militares, de los magistrados y de los funcionarios sólo responden de una manera muy relativa a las órdenes de un poder vacilante», etc. etc.

Los últimos acontecimientos relacionados con el monstruoso proceso de Burgos contra dieciseis antifranquistas vascos, las manifestaciones fascistas organizadas por el régimen, los descarados llamamientos a intensificar el terror contra el pueblo, han puesto bien de relieve lo que la clase obrera y las fuerzas democráticas pueden esperar de esos jefes militares.

El subjetivismo carrillista adquiere proporciones escandalosas cuando sus portavoces hablan o escriben de las Fuerzas Armadas.

Los elementos de origen popular de las Fuerzas Armadas solos, sin su incorporación al movimiento obrero y democrático, no pueden impedir las provocaciones de la reacción ni los golpes de fuerza para aplastar las legítimas aspiraciones de las masas trabajadoras. Sin necesidad de adentrarse en la historia de España, en 1936, en una situación de auge revolucionario, con fuertes sectores democráticos en el Ejército e incluso con su organización clandestina, con un gobierno de izquierda y un régimen democrático, esos sectores no pudieron impedir la sublevación de la ma-

yor parte de las Fuerzas Armadas aunque jugasen un papel muy destacado al lado del pueblo.

La historia enseña algo que los partidos comunistas no pueden olvidar: la burguesía, y hoy con más razón la oligarquía financiera, puede en cualquier momento imponer a los trabajadores la lucha armada, para la cual éstos han de estar preparados. Volviendo una vez más a Lenin, debemos recordar que «sin dominar todos los medios de lucha podemos correr el riesgo de sufrir una derrota enorme —a veces decisiva—, si cambios independientes a nuestra voluntad, producidos en la situación de las otras clases, ponen al orden del día una forma de acción en la cual somos particularmente débiles.»

El Partido Comunista de España tiene ya una experiencia de preparación antimilitarista y por eso, pese a la pérfida sublevación de los militares fascistas en julio de 1936, pudo contribuir decisivamente a la autodefensa del pueblo y a la lucha armada antifascista durante treinta y dos meses.

Seamos consecuentes con la historia y la realidad de España y terminemos de una vez para siempre con las especulaciones carrillistas sobre los mandos de las Fuerzas Armadas orientando nuestra actividad hacia los sectores de origen popular de las mismas.

por parte de las Fuerzas Armadas
cuando juzasen un papel muy desta-
cado al lado del pueblo.

La historia enseña algo que los par-
tidos comunistas no pueden olvidar:
la burguesía y hoy con más razón la
oligarquía financiera, puede en cual-
quier momento imponer a los traba-
jadores la lucha armada, para la cual
éstos han de estar preparados. Vol-
viendo una vez más a Lenin, debemos
recordar que «sin dominar todos los
medios de lucha podemos correr el
riesgo de sufrir una derrota enorme
—a veces decisiva— si cambios inde-
pendientes a nuestra voluntad, produ-
cidos en la situación de las otras
clases, ponen al orden del día una for-
ma de acción en la cual somos parti-
cularmente débiles».

El Partido Comunista de España tie-
ne ya una experiencia de preparación
antimilitarista y por eso, pese a la
debida sublevación de los militares
hasta en julio de 1936, pudo con-
tribuir decisivamente a la autoden-
tificación del pueblo y a la lucha armada
antifascista durante treinta y dos me-
ses.

Seamos consecuentes con la histo-
ria y la realidad de España y terminen
más de una vez las disputas con las
autoridades comunistas sobre los
límites de las Fuerzas Armadas
orientando nuestra actividad hacia los
sectores de gran popularidad de las
masas.

El problema de las Fuerzas Armadas
es un problema de gran importancia
para el pueblo español. En el momento
actual, el problema de las Fuerzas
Armadas es un problema de gran
importancia para el pueblo español.
El problema de las Fuerzas Armadas
es un problema de gran importancia
para el pueblo español. En el momento
actual, el problema de las Fuerzas
Armadas es un problema de gran
importancia para el pueblo español.

las bases y núcleo, en fin, que «la
gran mayoría de los militares, de los
maestros y de los funcionarios ad-
ministrativos de una manera muy re-
lativa a las órdenes de un poder ve-
lante», etc. etc.

Los últimos acontecimientos rela-
cionados con el movimiento procesa-
do Burgos contra dieciocho años de
dictadura vascos, las manifestaciones
fascistas organizadas por el régimen,
los desastrosos llamamientos a inter-
sificar el terror contra el pueblo, han
puesto bien de relieve lo que la cla-
se obrera y las fuerzas democráticas
puedan esperar de esos jefes milita-
res.

El subjetivismo cartilista y el
propósito de sacar a la luz sus
portavoces hablan a nombre de las
Fuerzas Armadas.

Los elementos de origen popular de
las Fuerzas Armadas, sin su in-
corporación al movimiento obrero y
democrático, no pueden impedir las
provocaciones de la reacción ni los
golpes de fuerza para quitar las
dignas aspiraciones de las masas
trabajadoras. Sin necesidad de ad-
vertir en la historia de España, en
1936, en una situación de gran revo-
lucionaria, con fuertes sectores de-
mocráticos en el Ejército, e incluso
con su organización clandestina, con
un gobierno de izquierda y un régimen
democrático, esos sectores no pue-
den impedir la sublevación de la ma-



IV. Enunciados Programáticos.

Resumiendo el cuadro general de confrontaciones mundiales, de la crisis de la sociedad capitalista de España y de su particular reflejo en la descomposición de la dirección carrillista, está completamente justificado que tratemos de formular unos puntos de referencia para la discusión y la recuperación práctica del Partido para la clase obrera y para la lucha por el socialismo. Esos puntos los resumimos en los siguientes enunciados programáticos.

1. España es hoy un país capitalista con un nivel de desarrollo económico intermedio entre el grupo de países industrializados y el llamado «Tercer Mundo». En España predominan las actividades industriales y los servicios; la mayor parte de la población se aglomera en las ciudades y aunque el campo experimenta un despoblamiento creciente por la crisis de sus arcaicas estructuras socio-económicas y el influjo caótico y brutal del capitalismo monopolista, todavía constituye una esfera importante de producción, de ocupación y de lucha de clases.

2. El desarrollo de las fuerzas productivas de España lleva a una creciente concentración de la riqueza y del poder en manos de la oligarquía financiera, la cual ejerce su dominación por medio de la **dictadura franquista**. La creciente interpenetración del capital bancario con el capital industrial monopolizador, y la instrumentación de la hegemonía económica de su personificación, de la oligarquía financiera, con el poder político de la alta burocracia estatal, ha configurado en España un complicado sistema de dominio y opresión de toda la sociedad, denominado capitalismo monopolista de Estado.

3. En la misma medida que se desarrolla el capitalismo monopolista de Estado, en España se desarrollan las clases sociales y los antagonismos entre ellas. La contradicción esencial, pero no la única, es la que existe entre la burguesía y el proletariado. La condición esencial de existencia y dominación de la burguesía es el acrecentamiento del capital por medio de la explotación del trabajo asalariado. Por eso, los que crean la riqueza no disponen, en el mejor de los casos, más que de lo necesario para poner su existencia cotidiana al servicio del capital. Esa situación objetiva es la base del antagonismo y de la lucha de clases y de la solidaridad del proletariado.

La clase obrera española ha registrado en los últimos decenios un desarrollo muy intenso, tanto en número, como en grado de concentración. El nivel de conciencia de sus intereses de clase no está adecuadamente expresado en organización, debido a la carencia absoluta de derechos políticos. Sin embargo, la expansión y el ahondamiento de sus luchas económicas y políticas prefiguran ya el enorme potencial revolucionario de esta clase que, por sus condiciones objetivas de existencia en la sociedad capitalista, está llamada a protagonizar y dirigir la lucha por el derrocamiento del poder del capital monopolista y por la construcción de un nuevo orden social, mediante la **socialización de los medios de producción** y de cambio para ampliar, enriquecer y hacer más humana la vida de los trabajadores.

4. El obstáculo principal con que tropieza hoy la lucha de la clase obrera

española por su liberación es la dictadura fascista del gran capital. Esa dictadura también lesiona los intereses de sectores sociales no proletarios, y, por eso, el partido de la clase obrera, el PCE apoyará —mediante alianzas formales o coincidencias de hecho— a todos los que luchen contra la dictadura franquista. Del mismo modo el PCE combatirá a todos los demagogos oportunistas y a los apologistas enredadores que abierta o veladamente hagan el juego al «orden establecido».

5. El PCE tiene como misión la organización, el desarrollo y el estimular el acendramiento en la toma de conciencia de las luchas democráticas y revolucionarias, por lo cual reclama:

a) Reivindicaciones inmediatas:

1. **Libertades políticas** de asociación, expresión y de huelga; reconocimiento de los derechos de las nacionalidades, medidas estas que exigen la liquidación de la dictadura, con la disolución de la brigada político-social, la supresión de los tribunales y leyes de excepción, la reforma democrática del Estado, la promulgación de una amnistía para los presos y emigrados políticos.

2. **Medidas a favor de la clase obrera:** organización autónoma de partidos y sindicatos obreros. Estabilidad en el empleo y absorción progresiva de la emigración; establecimiento de un salario mínimo vital con escala móvil; contratos de trabajo negociados a través de sindicatos libremente creados por los obreros; establecimiento de un sistema integral de previsión social (desempleo, accidentes, pensiones, becas de estudio, etc.) que asegure una vida decorosa a los trabajadores y a sus familiares; elaboración de una política estatal de vivienda y urbanismo, capaz de ofrecer condiciones de existencia humanas y confortables a los que crean la riqueza del país; elaboración de una política de educación que garantice una enseñanza racional moderna a los hijos del pueblo trabajador y de una

política económica y social que dé preeminencia a las inversiones de significación social inmediata y urgente.

3. **Reivindicaciones a favor de los trabajadores no asalariados.**

1) **Medidas a favor de los campesinos trabajadores.** Reforma radical del sistema de subvenciones y de comercialización de los productos agrícolas, asegurando la participación de los representantes de los campesinos trabajadores en la organización y legislación en esas esferas. Elaboración de un plan de urgencia integral de reforma del medio rural para la readaptación de la agricultura a las necesidades sociales, dando preeminencia a las demandas socio-económicas y culturales de los trabajadores asalariados, sin tierra y pequeños propietarios que ponga término a la propiedad latifundista mediante la nacionalización de sus tierras ociosas y mal cultivadas y que liquide el control monopolista de la red de comercialización y financiamiento agrícola. La nueva política debe estar inspirada por la preocupación principal de solucionar los problemas del trabajador, aunque ello suponga, en lo inmediato, rentabilidades económicas «no óptimas» desde un abstracto punto de vista tecnocrático. La reforma agraria exige un conjunto de medidas revolucionarias de orden político, económico y social que tienen como precondition básica la alianza obrera-campesina y la conquista de la hegemonía de la clase obrera, única capaz de crear la fuerza apta para quebrar el dominio de las clases oligárquicas que hoy se lucran con el atraso del agro, porque esto supone para ellos bajos salarios, desocupación encubierta, emigración y remesas de divisas, jugosas subvenciones y poder político.

2. **El P.C.E. apoyará las reivindicaciones de los profesionales, de los autopatrones y pequeños empresarios,** siempre que las mismas tiendan a dignificar su condición de protagonistas activos de la vida económica, a asegurarles una remuneración decorosa por su trabajo y sirvan para uni-

ficar los esfuerzos de todas las clases y sectores populares que luchan o pueden luchar para acabar con el predominio de la dictadura de la oligarquía financiera.

3. El PCE apoyará las reivindicaciones de los estudiantes e intelectuales

en favor de la modernización y democratización de la enseñanza y de la actividad científica cultural en general, propiciando su participación unitario en la vida civil y en las luchas populares, que encabeza la clase obrera contra la dictadura y el régimen de los monopolios.

b) Reivindicaciones mediatas:

El objetivo del PCE es la construcción del socialismo y el comunismo. El acceso al socialismo, a partir del capitalismo monopolista de Estado que hoy domina en España, constituye un proceso de liquidación de la dictadura, de articulación de un frente antimonopolista, cuyo eje tiene que ser la unidad de la clase obrera y la alianza obrera-campesina.

En lo que se puede prever a partir de las tendencias identificables hoy, la etapa de transformaciones antimonopolistas y de democratización del Estado que puede seguir si se derriba a la dictadura del gran capital, si la clase obrera y su Partido Comunista están en condiciones de unificar y dirigir un arrollador bloque popular será un período de agudísima **lucha de clases**, pero un período necesariamente breve en el que se dermirá de la manera más crucial el problema de ¿quién vence a quién? o el bloque dominante o un nuevo bloque popular antimonopolista, antiburgués y revolucionario.

Como la historia la hacen los hombres y las clases, no por encargo, ni por moldes, sino como resultado de la combinación de millones de situaciones, voluntades e intereses, lo único que hoy podemos identificar son los intereses y tendencias determinantes, los intereses económico-sociales y esbozar a partir de la experiencia del

movimiento revolucionario y de la teoría marxista-leninista, los contornos esenciales del socialismo a que aspiramos.

El socialismo supone en primer lugar, la supresión de la propiedad privada de los medios de producción mediante la socialización por el Estado proletario, para poner la producción al servicio de las necesidades sociales, organizando el trabajo y la distribución desde un único centro con un plan económico general para todo el país. En segundo lugar, el socialismo supone la participación decisoria de las masas trabajadoras a través de las más diversas formas políticas y sociales.

c) Posición del Partido Comunista de España ante los problemas internacionales.

El PC de España defiende el principio de la coexistencia pacífica entre Estados socialistas y capitalistas como una condición básica para impulsar la lucha de clases a todos los niveles, conjurando al mismo tiempo el chantaje atómico y el intervencionismo imperialista que intenta ahogar la lucha revolucionaria de los pueblos. Las relaciones interestatales basadas en este principio excluyen la posibilidad de una hecatombe termonuclear.

El Partido Comunista de España lucha por la anulación de los tratados político-militares con el imperialismo, concretamente por el desmantelamiento de las bases estratégicas instaladas por Estados Unidos en territorio español.

El Partido Comunista de España aprueba la celebración de la Conferencia por la seguridad europea a fin de que los esfuerzos del campo socialista en pro del mantenimiento de la paz y la seguridad en Europa se vean coronados de éxito.

El P.C. de España considera que el desarrollo del comercio exterior sin discriminaciones sobre la base del mutuo beneficio contribuye al mantenimiento de las relaciones normales entre los Estados de distinto régimen social.

El P.C. de España apoya resueltamente las demandas de los pueblos de la cuenca del Mediterráneo para conseguir la evacuación de la sexta flota norteamericana, que cumple la función de gendarme de la reacción.

Los comunistas españoles somos solidarios con la lucha del heroico pueblo del Vietnam que defiende sus conquistas revolucionarias contra la agresión yanqui así como con los demás pueblos de Indochina que combaten por su independencia nacional frente a los ataques del imperialismo norteamericano.

Los comunistas españoles condenamos la agresión israelí contra los pueblos árabes y, especialmente, el complot genocídico contra el pueblo palestino.

El P.C. de España está al lado del pueblo coreano que lucha contra el imperialismo y por la unidad e independencia de su patria.

El Partido Comunista de España manifiesta su solidaridad más completa con la fraterna Cuba que edifica la primera sociedad socialista en el continente latino americano.

Los comunistas españoles abogamos por el reconocimiento del derecho de la República Popular China a ser miembro de la ONU y de todos los demás organismos internacionales y condenamos la ingerencia norteamericana en la isla de Formosa, parte integrante de la República Popular de China.

El P.C. de España se solidariza con la lucha de los pueblos africanos de Guinea-Bissao, Angola y Mozambique, así como también con el movimiento de liberación del llamado Sahara español.

El Partido Comunista de España defiende con toda decisión los legítimos derechos de la República Democrática Alemana a ser reconocida como Estado soberano por todos los Estados del mundo e instituciones internacionales.

La situación actual en el mundo exige una amplia y firme unidad de to-

das las fuerzas antiimperialistas para desplegar una poderosa ofensiva contra las maniobras del imperialismo. Los comunistas españoles reconocemos el papel fundamental del campo socialista y, en particular, de la Unión Soviética, que sostiene moral y materialmente la lucha de todos los que se levantan contra el imperialismo.

d) Posición del P.C. de España ante el movimiento comunista internacional.

Luchamos por la más estrecha unidad del movimiento comunista internacional sobre la base de los principios raigales del marxismo-leninismo; por la indestructible amistad con el Partido Comunista de la Unión Soviética que dirige la construcción de la sociedad comunista, reafirmando, asimismo, nuestra fraternal amistad y solidaridad con todos los partidos hermanos del mundo socialista y del mundo capitalista.

El Partido Comunista de España aprueba totalmente los documentos de la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros celebrada en Moscú en junio de 1969.

Los comunistas españoles proclamamos nuestra solidaridad con el Partido Comunista Portugués que lucha contra el poder fascista en su país. Consideramos deber insoslayable el estrechar los vínculos de amistad y de ayuda mutua con nuestros hermanos portugueses.

El Partido Comunista de España y los trabajadores emigrados.

Para el PCE los trabajadores emigrados, que constituyen el grueso de los tres millones cien mil españoles residentes en el extranjero (de los cuales un millón en Europa Occidental) cientos de miles en otros países de América Latina y colonias importantes en todos los continentes), son un componente inseparable de la clase obrera española, explotada por el mecanismo imperialista, gracias al contu-

bernio de la burguesía española con los monopolios y gobiernos burgueses extranjeros.

Se ha estimado que los trabajadores españoles emigrados en Europa Occidental producen para los capitalistas de esos países un valor equivalente al 15 por ciento de la producción anual de toda España. Se sabe además que los trabajadores emigrados aportan alrededor del 15% de las divisas totales que entran en el país (unos 400 millones de dólares anuales suman sus «remesas»), divisas que la burguesía española utiliza para atender sus cuentas con el extranjero. Esa cifra representa ya un 2 por ciento de los ingresos totales (Renta Nacional) del país.

Para conseguir esos «ingresos» la burguesía española no sólo subasta a bajo precio sectores fundamentales de la economía (industria química, automovilística, electrónica, metalomecánica y otras) sino que, desde hace mucho tiempo, explota a mansalva el «negocio» de la exportación de mercancía humana a los países capitalistas más industrializados y a todos los puntos del planeta donde tenga demanda.

La satelización de España en los arrabales del Mercado Común Europeo, en ese engendro de los grandes monopolios imperialistas que tanto cautiva a la burguesía de España, se ha hecho y se sigue haciendo, en buena medida, a través de la venta a bajo precio de los «sobrantes» de fuerza de trabajo que el retraso y las irritantes desigualdades del sistema socioeconómico español produce.

El Mercado Común Europeo no tiene la más mínima obligación contraída en favor de los obreros emigrados españoles pues el Convenio «preferencial» firmado con el Gobierno español, sólo se refiere al intercambio de artículos industriales y agrícolas y deja de lado hasta esa ficción hipócrita que llaman «libre circulación de la mano de obra». Ese absoluto desamparo legal de los emigrados españoles, favorece a las economías capi-

talistas europeas deficitarias de fuerza de trabajo, las cuales pueden absorber a su gusto nuestros «excedentes» de mano de obra barata, sin comprometerse en lo más mínimo a mejorar las inhumanas condiciones de vida y de trabajo de nuestros emigrados.

La burguesía española y la burocracia aburguesada del Instituto «Español» de Emigración (que mas propiamente debería llamarse «Instituto Extranjero de Trata de Españoles») y de ciertos servicios «diplomáticos» y apostólicos recogen las migajas que les tiran los monopolios extranjeros, mientras que éstos últimos, además de la plusvalía extraída explotando el trabajo de los emigrados, se ahorran los gastos de formación y también la mayor parte de las prestaciones sociales que deben pagar a los trabajadores locales.

De ese modo, el coste de la mano de obra emigrada les resuta más barato que el de los obreros «nacionales» y la diferencia da lugar a una competencia que los monopolios europeos aprovechan para presionar (hacia la baja) sobre el nivel general de salarios y las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de la clase trabajadora. Y precisamente ahí, está la raíz económica de la discriminación en los salarios y en las condiciones de trabajo, que la burguesía emplea para escindir y contraponer a las distintas partes de la clase obrera continental y para evitar se forme un movimiento multinacional obrero, contrapuesto a la mafia internacional de los monopolios.

Con esa misma finalidad, la burguesía monopolista y sus mercenarios democristianos y socialdemócratas contraponen, los obreros «nacionales» a los obreros emigrados, tratando incluso de escindir a los últimos en categorías de «veteranos» y «novatos» o distinguiendo a los emigrados según sean o no ciudadanos de países miembros del Mercado Común, es decir, a los emigrados italianos que son los únicos que emigran en masa ya que los alemanes, franceses, holandeses o belgas no suelen emigrar, de los emi-

grados españoles, portugueses, griegos, etc. «no ciudadanos de la Comunidad».

Toda esa situación creada por los monopolios en su exclusivo beneficio, supone para los obreros españoles emigrados la absoluta indefensa legal. En muchos países de Europa Occidental los trabajadores españoles no gozan ni del derecho mezquino a elegir el patrón que les explota, puesto que están atados por contratos leoninos (de un año, como en Alemania Federal) gestionados por los burócratas del I.E.E. y, en ocasiones, por tratos con intermediarios que se aprovechan de las situaciones «irregulares» (en orden a documentación, contrato, etc.) del emigrante para esquilmarle de una manera vergonzosa. Los trabajadores inmigrados no gozan de estabilidad en el empleo, se ven constreñidos a cumplir las faenas más ingratas y nocivas, perciben los más bajos salarios y sufren todas las incomodidades inherentes a la discriminación y a la inadaptación a un ambiente, por lo común, hostil. Un ejemplo alarmante de esa hostilidad ha sido la oleada racista desatada en Suiza con el referéndum anti-extranjeros, propuesto para decidir la expulsión de ese país de una gran parte de los trabajadores emigrados y que si no ha prosperado ha sido exclusivamente por el interés de la burguesía helvética en seguir lucrando con la explotación «en casa» de una mano de obra de tipo colonial.

Todas las urbes industriales de la Europa de los «milagros» y de la «sociedad de consumos» lucen sus ghettos de emigrantes, donde la vida social, cultural y familiar está completamente excluídas, de hecho, y, en ocasiones, hasta de derecho. En los barracones y casuchas de empresa u organismos patronales, se esquilma a los obreros se les somete a toda clase de humillaciones mediante reglamentos cuartelarios, servicios de policía y alambradas, que componen el decorado de los modernos «lager» para emigrantes.

Las clases dominantes españolas siempre han presentado la emigración

como un fenómeno «natural», permanente y fatalmente inevitable y hasta ha habido quienes con insultante descaro han querido atribuirle al «espíritu de aventura de los españoles». «Nuestro país —decía Garcia Saez, Director General de Instituto «Español» de Emigración —produce emigrantes y esto, nos guste o no hay que aceptarlo» (Madrid 11-12-68). Con ese argumento la burguesía quiere que aceptemos la emigración como un hecho fatal, semejante a la lluvia o a los terremotos. Pretende así ocultar las raíces sociales del problema.

La realidad es que la emigración ha sido y es un «negocio» permanente de las clases dirigentes españolas. La emigración les ha servido y les sirve como «válvula de escape de la presión social», de la indignación de las masas trabajadoras víctimas del desempleo y de la miseria, originada por el sistema de propiedad terrateniente y por la explotación monopolista de la economía. Al mismo tiempo, la emigración ha ido acrecentando su importancia como factor equilibrador de la «Balanza de Pagos» debido a las transferencias de dinero de los emigrantes, y también como fuente de las más sucias especulaciones, que van desde el negocio de transporte de emigrados por las navieras que atendían las rutas del Nuevo Mundo, el de los bancos y otras instituciones financieras que supieron canalizar las remesas y el ahorro de los emigrantes, hasta el negocio marrullero de toda suerte de tratantes menudos que operan en el reclutamiento, más o menos clandestino, de mano de obra para los patronos más inescrupulosos y que se lucran estafando a los emigrantes más desamparados.

Por otro lado es un hecho que mientras la emigración resulta un «negocio» para la burguesía, para el país,

Los obreros, los campesinos y las para la sociedad es una pérdida neta e irreparable del elemento fundamental de su riqueza. Más concretamente, los costos de la emigración recaen exclusivamente sobre las clases trabajadoras españolas. Son los trabajadores,

únicos proveedores de mano de obra emigrante, los que emplean buena parte de sus pobres recursos en criar y educar a esas fuerzas de trabajo que, en cuanto devienen adultas, en lo mejor de su edad, son forzadas a emigrar y van a enriquecer a la burguesía de los países de inmigración, perpetuando así el círculo infernal del subdesarrollo, que genera, precisamente, la emigración de los más pobres.

El problema de la emigración interesa a todas las clases trabajadoras de la ciudad y del campo, de una manera muy directa, porque desde antiguo la burguesía se vale de él como alternativa y «escapismo» a las reformas imprescindibles de la estructura económica, social y política del país que, como ya hemos dicho, son las causas profundas de la emigración. Por eso las clases trabajadoras tienen que sumar a su ejército de combate la acción reivindicativa de los trabajadores emigrados.

En un sentido general, la emigración de trabajadores sigue a los movimientos del capital, ligados al desarrollo desigual de las economías capitalistas. Por eso, mientras exista la economía capitalista que se gobierna por la ley de la ganancia, existirá también la desigualdad entre sectores, regiones y países, desigualdad que no puede por menos de originar un drenaje constante de fuerza de trabajo de los países retrasados hacia los países económicamente más desarrollados. Así es como se asegura el sistema capitalista su imprescindible «Ejército obrero de reserva», siendo su nivel multinacional una de las particularidades del imperialismo o capitalismo monopolista de Estado de nuestros días.

Para que desaparezca el «negocio» de la emigración e inmigración de trabajadores es necesario que las fuerzas productivas se desarrollen a ritmos equilibrados en todo el sistema económico, y esto sólo es factible en una economía socialista planificada que tenga por meta la satisfacción de las necesidades sociales y no la

obtención de ganancia privada-capitalista.

Por tanto, mientras exista el imperialismo, mientras el Mercado Común Europeo esté gobernado por los monopolios, seguirán acentuándose las diferencias regionales y nacionales y se agravará el drenaje de fuerzas humanas de trabajo en perjuicio de las economías más débiles que, de ese modo, verán aumentar su retraso. Las consecuencias objetivas que esa situación acarrea para las víctimas concretas, para los trabajadores emigrados, generan y generarán en medida creciente rebeldía, protesta, organización y lucha contra las manifestaciones económicas, sociales, políticas (humanas, en definitiva) de la política imperialista. De esa política que está además en el origen del atraso económico de los países productores de emigrados.

En consecuencia, la legítima lucha por el «retorno» de los emigrados forzosos, pasa hoy por el combate contra todas las manifestaciones de discriminación, por la conquista de niveles de salarios que cubran el verdadero costo de la fuerza de trabajo emigrada (teniendo en cuenta, como dijimos, los gastos de su formación en el país de origen), por la obtención de viviendas decorosas, de prestaciones sociales y servicios comunitarios (transporte, salud, enseñanza, etc.) que permitan una vida familiar humana, que aseguren la educación de los hijos del emigrante, por el derecho de éstos a organizarse de una manera autónoma para defender sus propias reivindicaciones ante el gobierno español y ante los gobiernos y organismos de los países de residencia.

Los obreros revolucionarios y todos los españoles de conciencia limpia saben cuan grande es el costo humano y social de la hemorragia emigratoria; saben que en España no hay «exceso» natural de población trabajadora (pues los ricos y sus lacayos no emigran, aunque «sobran»), saben que el éxodo rural y la emigración al extranjero tienen su origen en el

latifundismo, el predominio monopolista de la oligarquía financiera y de las élites burocráticas. En una palabra, los trabajadores saben que sólo mediante profundas reformas sociales que echen al traste con el dominio monopolista y latifundista, será posible cortar la hemorragia de la emigración y crear condiciones para un desarrollo equilibrado de todas las regiones y ramas, lo cual asegurará la reabsorción gradual de la masa obrera emigrada.

En su permanente labor confusio- nista sembradora de mitos, la burguesía española y sus plumíferos mercenarios trata de inculcar a los trabajadores la ilusión de llegar a convertirse en pequeños capitalistas o «auto- patronos». Pretenden así desviar el descontento y la rebeldía de la emigración trabajadora hacia cauces «privatizadores» de la mal llamada «sociedad de consumo». Ese intento mistificador, lo mismo que la institucionalización del «negocio» de la emigración a través del Instituto «Español» de Emigración —con el que la burguesía pretende dar un carácter «social» y «nacional» al problema— debemos desenmascararlos y rechazarlos del mismo modo que la clase obrera ha rechazado en los hechos todo el tinglado verticalista de los «sindicatos» policíacos. Y del mismo modo que los trabajadores ocupados en el país reclaman hoy derechos sindicales y democráticos, aumentos de salarios a tenor con el costo de la vida, ocupación y estabilidad en el empleo, condiciones humanas y seguridad en el trabajo; la parte emigrada de esa clase obrera debe sumarse a esa lucha con sus propias reivindicaciones. El sentido general de las mismas estará orientado a erradicar las causas que generan la emigración (el sistema latifundista y el dominio de los monopolios y la dictadura fascista que los sustenta), pero sus planteamientos inmediatos deben apuntar a la solución de los problemas canden-

tes específicos de cada lugar (paridad de salarios, prestaciones sociales, escuelas, vivienda, servicios comunitarios, etc.), trabajo y vivienda asegurados a los que regresan a España voluntaria o forzosamente.

Una condición importantísima para poder desplegar una lucha eficaz en defensa de sus derechos y reivindicaciones, es que los trabajadores emigrados constituyen sus propias organizaciones autónomas, respecto al aparato de la dictadura franquista y de los gobiernos y organismos de los países de inmigración) y que se orienten firmemente a la creación de una Federación de Trabajadores Emigrados en la línea unitaria de las Comisiones Obreras de España, como parte integrante del movimiento obrero de España y como vínculo internacionalista de éste último con los sindicatos y organizaciones de la clase obrera de los países de emigración.

Los obreros emigrados pueden y deben organizarse y luchar ya hoy por la revisión de todos los «convenios de emigración» firmados por el Gobierno franquista con los gobiernos burgueses de los países de inmigración.

El PCE prestará especial atención a la lucha de los trabajadores emigrados, procurando que su enorme potencial revolucionario no resulte esterilizado por maniobras «legalistas» o patrioterías de la dictadura y sus asociados extranjeros y, sobre todo, se esforzará por impedir que se emplee a los trabajadores emigrados como objetos y sujetos de división del movimiento obrero internacional.

El PCE se esforzará, también en este sentido, por lograr la coordinación común de los comunistas de todos los países en defensa de los derechos y reivindicaciones de los trabajadores emigrados, que son un importante componente del frente antimonopolista en la Europa de los monopolios.



MINISTERIO
DE CULTURA

